

79ª REUNION — 16ª SESION EXTRAORDINARIA — DICIEMBRE 22 DE 1958

Presidencia de los señores diputados Federico F. Monjardín, Jorge Raúl Decavi,
Oscar López Serrot y Olegario Antonio Becerra

Secretario: doctor Eduardo T. Oliver. — Prosecretario: doctor Enrique A. Pardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ARAMBURU, Julio P.
ARMENDARIZ, Alejandro
AYBAR, José Antonio
BAIGORRIA, Nélida Rosa T.
BAUDUCCO, Enrique
BECERRA, Carlos Alberto
BECERRA, Olegario Antonio
BEIRO, Angel Francisco
BELNICOFF, Manuel
BENEVENTANO, Domingo
BERNASCONI, Mario
BLANCO, Rubén Víctor M.
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BONET CONVALIA, Salvador
BONIFACIO, Juan José
BREYTER, Isaac
BRUZZO IRAOLA, Juan P.
BULIT GONÍ, Enrique A.
BURDEOS, José Antonio
BUSTOS, Jerónimo L.
CAGGIANO, Angel R.
CALABRESE, Pablo
CAMET, Carlos Ernesto
CANEPA, Sebastián Oreste
CARDENAS, Juan Carlos
CARRERA, Rodolfo Ricardo
CARRETONI, Jorge C.
CASAS, José B.
CASTILLO, Hugo Enrique
CIALZETA, Domingo
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTIN, Carlos R.
CORREA, Carlos María
CORTÉS, Ezequiel
CUARETTA, César Ramón
CUEVAZ, Agustín
CHAVERO, Luciano
DAMIANI, Salvador
DECAVI, Jorge Raúl
DE LA VEGA, Juan Carlos
DESPOUY, Pablo Pedro
DÍAZ, Rosario Domingo
DOMINGORENA, Horacio Osvaldo
DOURS, Roberto José
ERREA, Daniel
ESCALADA, Alfredo H.
FASCE, Antonio
FAYA, Luis

FERNANDEZ, José Manuel
FERRARIS, Jorge Domingo
FERREIRA, Jorge W.
FOSSATI, Evers Nelson
FREGA, José
GALEANO, Roberto A.
GALLO, Luis M.
GARCÍA, Ernesto
GARCÍA FLORES, José I.
GARCÍA VEIGA, Ignacio
GARONA, Alberto Agustín
GOLDSTRAJ, Zenón
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GONZALEZ, Ricardo A.
GOROSPE, Valentín
GRANDI de MARTÍN, Palmira A.
GUTIERREZ, Victorino H. B.
GYSSSELS, Néstor Juan
HEREDIA, Bernardo M.
HEREDIA, Gilberto L.
HERNANDEZ RAMÍREZ, Rafael
JARA MELAGRANI, Ubaldo H.
JUÁREZ PEÑALVA, Miguel Angel
JUNIN, Simón
JURI, Jorge
LAFUENTE, Augusto Antonio
LAGOS, César M.
LEÓN, Luis Agustín
LICEAGA, José V.
LICEAGA, María Teresa M. de
LÓPEZ, Juan Raúl
LÓPEZ AGUIRRE, Juan J.
LÓPEZ BALLESTEROS, Horacio María
LÓPEZ SANSÓN, Ernesto
LÓPEZ SERROT, Oscar
LLUGDAR, Elias N.
MALUF, Emilio
MANES, Juan Carlos
MANUBENS CALVET, Reginaldo
MARCONATO, Pedro Luis
MARCHINI, Atilio Enrique O.
MARINI, Anselmo A.
MARTIRANI, Luis
MERCADO, Valentín A.
MIGLIARO, Victorio M.
MONJARDÍN, Federico F.
MUSACCHIO, Vicente M.
NASSIF NEME, Carim
OREJA, Pablo Fermín
PAEZ, Nieves Humberto
PANELO, Ricardo E.

PARENTE, Miguel A.
PARODI GRIMAU, Misael J.
PARRY, Enrique
PAVIOLO, Ricardo J.
PERETTE, Carlos H.
PERKINS, Jorge Walter
PITTALUGA, José Saturnino
PITTO, Luis María
POITEVIN, R. Emilio
PONCE DE LEÓN, Martín A.
POSSE, Melchor S.
POZZIO, Antulio F.
PRECE, Angel Oscar
RAVETTI, Francisco Antonio
RECIO, José A.
RODRÍGUEZ ARAYA, Agustín
RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRÍGUEZ DÍAZ, Rogelio S.
ROSENKRANTZ, Eduardo S.
SAGO, Fayiz
SALIM, Abraham
SALOMONE, Humberto
SANTAGADA, Nírido E.
SAYAGO VALDEZ, Miguel Angel
SCHWEIZER, Bernardo
SILVEIRA MARQUEZ, Carlos
SIRENA, Antonio C. P.
SOLARI, Juan Alberto
SPANGENBERG, Enrique
SUJEROS, Pedro Ignacio P.
TABULLI, Pascual
TECCO, Luis Alberto
TELLO ROSAS, Cándido
TONELLI, Haroldo Juan
TORTONESE, Dante Oscar
TORTORA, Antonio
URCELAY, Rafael Cándido
UZAL, Francisco Hipólito
VALLE, Salvador
VECCHIETTI, Augusto Néstor
VERDAGUER, Armando Miguel
VILLAR, Alfredo
VINCIGUERRA, Bómulo
ZARRIELLO, Raúl Jorge
ZUBIAURRE, Alberto

AUSENTES, CON LICENCIA:

ALDERETE, Ello
ALZABÉ, Pedro Bernabé
AQUINO, Porfirio Antonio

ARITO, Juan
 BARRIO, Luis
 CASELLA PINERO, Juan M.
 CONTE (h.), Adolfo
 FEIGUÍN de FERRARI, Berta
 GIANSEIRA, Marino Alejandro
 GIORDANO ECHEGOYEN, Mario
 LAFUENTE, Ambrosio César
 LISCHETTI, Carlos A. M.
 LÓPEZ, Juan Carlos Godofredo
 LUELMO, Horacio Flavio
 MANTECÓN, Esteban
 MONTE, Ricardo Alvaro

PENNACCHI, Alfredo Arquímedes D.
 RIVERO, Jorge I.
 SANTONI, Nabucodonosor
 ZANNI, Enrique Mario

AUSENTES, SIN AVISO:

ABAROA, Rufino Vicente
 BERTONE, Marcos E.
 FUERTES, A. Ricardo
 GILI, Miguel
 GUTIERREZ, José María
 KRONHAUS, Arnoldo

MAS, Juan Antonio
 MORENO, Eufemio Teclo
 MOSCA, Gabriel Carlos J.
 PERALTA, Domingo Orlando A.
 POLOGNA, Aurelio José
 PURICELLI, Valdemar
 RUIZ, Lucio Carlos
 SEGOVIA, Carlos A.
 SOLANAS, Juan Carlos
 STORANI, Conrado Hugo
 SUAREZ, Faundo Roberto
 TESSIO, Aldo E.
 TROILO, Eleogardo B.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría. (Página 6841.)
- 2.—Trámite de asuntos entrados. (Página 6841.)
- 3.—Licencias para faltar a sesiones. (Página 6842.)
- 4.—Fijación del orden de la labor de la Honorable Cámara. (Página 6842.)
- 5.—Integración de la comisión especial encargada de informar sobre la cuestión planteada a raíz de las palabras del señor diputado Rodríguez Araya en debates de la Honorable Cámara. (Página 6848.)
- 6.—Continúa la consideración del despacho de la comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de reformas al régimen impositivo. Se sanciona. (Página 6848.)
- 7.—Consideración del despacho de la comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre régimen de distribución de impuestos. Se sanciona. (Página 6856.)
- 8.—Consideración del despacho de la comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre aplicación del escalafón para el personal civil de la administración pública. (Página 6866.)
- 9.—Apéndice:
 - I.—Sanciones de la Honorable Cámara. (Página 6897.)
 - II.—Asuntos entrados:
 - 1.—Mensaje del Poder Ejecutivo por el que remite informes sobre sumas ingresadas al fondo instituido por ley 13.478. (Página 6907.)
 - II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se deja sin efecto la obligación de pedir certificados de inhibiciones, embargos e hipotecas para la transferencia de bienes de dominio privado del Estado nacional. (Página 6907.)
 - III.—Mensaje del Poder Ejecutivo sobre inclusión en las sesiones extraordinarias de la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo. (Página 6908.)
 - IV.—Mensaje del Poder Ejecutivo: inclusión en las sesiones extraordinarias de la aprobación de los convenios comerciales con las repúblicas de Venezuela y de Perú, y con la Unión Soviética. (Página 6908.)

- V.—Mensaje del Poder Ejecutivo: inclusión en las sesiones extraordinarias de la aprobación del contrato a que se refiere el decreto 10.633/58. (Página 6908.)
- VI.—Mensaje del Poder Ejecutivo: inclusión en las sesiones extraordinarias de los proyectos de ley sobre denominación de la diócesis de La Pampa, y jurisdicción y límites de la arquidiócesis de La Plata y de las diócesis de Azul, Mercedes y San Nicolás. (Página 6909.)
- VII.—Comunicaciones del Honorable Senado. (Página 6909.)
- VIII.—Comunicaciones oficiales. (Página 6909.)
- IX.—Despachos de comisión. (Página 6909.)
- X.—Petición particulares. (Página 6909.)
- XI.—Proyecto de ley del señor diputado Tarulli: escuelas de readaptación y educación de niños deficitarios o débiles mentales. (Página 6910.)
- XII.—Proyecto de ley del señor diputado Cortés: transferencia de inmuebles adquiridos en propiedad horizontal. (Página 6911.)
- XIII.—Proyecto de ley del señor diputado Marconato: cuerpo de policía preventiva para vigilancia de menores en la Capital Federal. (Página 6912.)
- XIV.—Proyecto de ley del señor diputado Cárdenas: subsidio al Club Sportivo Alfredo Guzmán, de San Miguel de Tucumán. (Página 6913.)
- XV.—Proyecto de ley del señor diputado Tarulli: edificio para la Escuela de Artes y Oficios en San Miguel de Tucumán. (Página 6914.)
- XVI.—Proyecto de ley de los señores diputados Suárez y otros: subsidio a la Comisión pro Mausoleo para guardar los restos del ex presidente de la República doctor Roque Sáenz Peña. (Página 6914.)
- XVII.—Proyecto de ley del señor diputado Rodríguez Araya: requisitos para el ingreso de los aspirantes a cursos del magisterio. (Página 6914.)
- XVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Tarulli: creación de una escuela mixta en Los Sarmientos, Tucumán. (Página 6915.)

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Migliaro. — Con relación a este artículo, señor presidente, tengo una preocupación que deseo me aclare el señor presidente de la comisión.

De acuerdo con los términos de la Constitución Nacional, las provincias disponen de amplios poderes para legislar con relación a este impuesto. Si aprobamos este artículo lesionaremos los derechos que la Constitución acuerda a las provincias a este respecto, porque invadimos las facultades propias de las legislaturas, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional.

Esa es la pregunta que quería formular a los señores miembros de la comisión.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Prece. — Como se trata de una ley convenio, evidentemente las provincias no están obligadas a acogerse a ella, pero en el caso que deseen hacerlo, debe cumplirse lo que indica este artículo. En primer lugar, el acogimiento debe ser establecido por ley de la Legislatura. Las demás sin normas que tienden a evitar la superposición impositiva, que debe evitarse en este problema a través de las autonomías que tienen las provincias para aplicar los impuestos directos.

Por eso estas normas, que por otra parte ya están en la ley vigente, no hacen más que asegurar que esta ley convenio pueda funcionar sin inconvenientes que signifiquen una lesión a los intereses económicos del país. Por otra parte, no interfieren en la recaudación.

Además, permiten hacer marchar este proceso en total armonía entre las provincias y la Nación, con la renuncia de atribuciones que la Constitución acuerda a cada una de las partes.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Federico F. Monjardín.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pozzio. — La inquietud del señor diputado Migliaro evidentemente cuenta con una posición de tipo constitucional que hubo que obviar. Tanto es así, que esta clase de leyes han sido criticadas duramente por los hombres de nuestro partido y por todos aquellos tratadistas que han combatido esta calificación de leyes contratos, como fueron denominadas después del año 1935, cuando se implantaron por primera vez en ocasión de la ley de impuestos a los réditos, que corresponde pura y exclusivamente a las provincias y que fue impugnada de inconstitucionalidad. Luego se fue obviando el inconveniente a través de leyes de este tipo. Evidentemente se tendrá que llegar a una modificación constitucional para establecer ya definitivamente ese derecho de las provincias y fijar también definitiva-

mente la coparticipación que les debe corresponder y que nuestro partido considera que debe ser del 50 por ciento.

En el comienzo de estas sesiones yo presenté un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo nacional se hiciera eco de esta inquietud de las provincias de auténtico federalismo, y se llegase al 50 por ciento. Pero mientras subsista esta situación de tipo constitucional, de que los impuestos directos deben ser por tiempo limitado, debe haber una coparticipación de las provincias, y se va haciendo a través de estas leyes mal calificadas de leyes contratos. Pero evidentemente obvian en principio el inconveniente, y de ahí que sean por tiempo prudencial, como en este caso se establece y se viene repitiendo desde 1935.

De modo que la disposición que se considera tiende a obviar el inconveniente y en realidad da oportunidad a las provincias para que hagan las declaraciones pertinentes y puedan adherirse o no a estos convenios. Es indudable que constituye un anhelo de esta ley, al igual que las anteriores, que las provincias no apliquen gravámenes iguales a los que contempla la ley, para evitar la superposición de impuestos.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Migliaro. — Deseo manifestar a la Honorable Cámara que he quedado satisfecho con las explicaciones dadas por los señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — Si no se hace uso de la palabra, se dará por aprobado el artículo 8º.

— Se aprueba.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 9º (capítulo III, de la Comisión de Contralor e Indices).

— Se aprueban los artículos 9º, 10, 11 y 12.

— Se aprueban asimismo los artículos 13 (capítulo IV, Derecho de repetición de los contribuyentes, y 14 (capítulo V, Otras disposiciones).

Sr. Presidente (Monjardín). — El artículo 15 es de forma.

Queda sancionado el proyecto de ley (1).

8

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION

(Orden del día número 595)

Despacho de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aplicación del

(1) Véase el texto de la sanción en la página 6905.

escalafón para el personal civil de la administración pública nacional y otros asuntos vinculados al presupuesto general de gastos de la Nación; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Al solo efecto de posibilitar su vigencia desde el 1º de noviembre de 1958, autorízase al Poder Ejecutivo para que aplique el escalafón para el personal civil de la administración pública nacional aprobado por el decreto 9.530, del 7 de noviembre de 1958, y ratifiquen el artículo 10 de dicho decreto y los puntos 26, 27, 43 y 44 del escalafón instituido por el mismo.

Asimismo, quedan autorizados los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, para elaborar y aplicar un escalafón para los agentes del Poder Legislativo, y para reestructurar el presupuesto del anexo Congreso de la Nación correspondiente al ejercicio 1958/59, debiendo el Poder Ejecutivo incorporar esta reestructuración al presupuesto general.

Art. 2º — El Poder Ejecutivo queda facultado para fijar una nueva escala de remuneraciones y denominación de los empleos del personal al servicio del Estado, substituyendo o readaptando la que se halla en vigencia por el artículo 11 de la ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto - edición 1943), reemplazado por el artículo 23 del decreto ley 23.573/56. El Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable Congreso de lo que dispusiere en uso de la facultad que se le acuerda.

Art. 3º — El Poder Ejecutivo, mediante compensación de las autorizaciones totales que contengan los presupuestos en vigor, arbitrará los créditos necesarios para posibilitar la aplicación del escalafón a que se refiere el artículo 1º, quedando facultado para incorporar en dichos presupuestos, con cargo a los recursos respectivos, créditos en la medida que sea estrictamente indispensable para alcanzar los niveles que no puedan lograrse por vía de aquellas compensaciones.

Art. 4º — Con efecto a partir del 1º de noviembre de 1958, el Poder Ejecutivo podrá acordar al personal comprendido en el presupuesto general de la administración, no incluido en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional en virtud de lo establecido en los apartados c), e), f), h), k) y l) del artículo 2º del citado cuerpo legal, los beneficios que instituye el punto 26 del escalafón aprobado por el decreto 9.530/58.

Art. 5º — El Poder Ejecutivo modificará y adaptará los plazos y fechas que contiene el

decreto ley 16.990/57, de presupuesto general de la administración nacional para 1957/58, y sus complementarios 5.945/58, 5.965/58 y 6.285-58, cuyas partes dispositivas tienen aplicación durante el curso del ejercicio 1958/1959.

Art. 6º — Fijase en la suma de un mil millones de pesos moneda nacional (\$ 1.000.000.000) el crédito de emergencia para el ejercicio 1958-1959, correspondiente a la parte del presupuesto de gastos que se atienden con recursos de rentas generales.

Dicho crédito podrá destinarse durante el ejercicio, a reajustar cualquiera de las partidas contenidas en los anexos de esa parte del presupuesto, sea cual fuere el régimen que regule la forma de incrementación de las mismas, siempre que tales anexos no admitan compensaciones internas que permitan resolver las insuficiencias producidas. El crédito de emergencia también podrá aplicarse en el ejercicio a la creación de nuevos conceptos de inversión.

Art. 7º — Facúltase al Poder Ejecutivo para introducir en el anexo Servicios de la Deuda Pública, las modificaciones y ampliaciones que fuesen necesarias para la normal atención de los servicios de intereses, amortización y demás gastos relativos a la deuda pública nacional, durante el ejercicio 1958-1959.

Art. 8º — Establécese en la suma de un mil millones de pesos moneda nacional (\$ 1.000.000.000) el monto máximo que el Poder Ejecutivo podrá anticipar a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con fondos del Tesoro nacional, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 1959, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de la ley 14.070, para atender los respectivos planes de obras y trabajos públicos. Autorízase asimismo al Poder Ejecutivo para entregar a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con cargo de reintegro, las sumas que requieran para cubrir los déficit que irroguen las ejecuciones de sus presupuestos correspondientes al año 1959.

El Poder Ejecutivo queda facultado para hacer uso del crédito público en la medida necesaria para atender esos anticipos y entregas de fondos.

El presente artículo substituye el segundo párrafo del artículo 11 del decreto ley 16.990/57.

Art. 9º — El Fondo de Restablecimiento Económico Nacional creado por el decreto ley 2.004/55 será aplicado para la atención de las finalidades a que se refiere dicho decreto ley y sus modificatorios 9.875/56 y 10.487/57.

Art. 10. — Deróganse los incisos b) del artículo 15 del decreto ley 13.126/57; c) del artículo 14 del decreto ley 13.128/57; c) del artículo 13 del decreto ley 13.129/57; y h) del artículo 16 del decreto ley 13.130/57. A efectos del cumplimiento de las disposiciones de la ley

de contabilidad, el Poder Ejecutivo previa su aprobación incorporará al presupuesto general de la administración nacional correspondiente al ejercicio 1958-1959, los presupuestos administrativos de las respectivas entidades descentralizadas.

Art. 11. — Substitúyese el texto del artículo 33 de la ley 11.672 (complementaria permanente del presupuesto, edición 1943) modificado por el decreto ley 5.169/58, por el siguiente:

«Artículo 33. — Para la atención de los gastos que por disposición legal deben cubrirse con el producido de la negociación de empréstitos, el Poder Ejecutivo emitirá anualmente, con mención de las leyes que faculden su emisión, la cantidad necesaria de títulos de deuda pública interna o externa, que serán amortizados mediante sorteo a la par, cuando la cotización sea a la par o sobre la par, y licitación o compra cuando la cotización sea abajo de la par, pudiendo realizar asimismo las operaciones de financiación transitoria que resulte necesaria, inclusive con el Banco Central de la República Argentina y demás instituciones bancarias oficiales mediante la utilización por parte de éstas de fondos que obtengan de préstamos o colocaciones provenientes del exterior. A esos efectos, fáculase a dichas instituciones bancarias para celebrar con el gobierno nacional los convenios respectivos, en forma independiente y al margen de las otras operaciones de crédito que puedan realizar con dicho gobierno, de acuerdo con las autorizaciones y limitaciones contenidas en las cartas orgánicas correspondientes.»

Art. 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 18 de diciembre de 1958.

Angel Oscar Prece. — Juan P. Bruzoz Iraola. — Domingo A. Condoluci. — César Ramón Cuaretta. — Jorge W. Ferreira. — Ricardo A. González. — Luis M. Gallo. — Gilberto L. Heredia. — Miguel Angel Juárez Peñalva. — Augusto A. Lafuente. — Abraham Salim. — Rómulo Vinciguerra.

En disidencia parcial:

Alejandro Armendáriz. — José B. Casás. — Carlos R. Contín. — Anselmo A. Marini. — Valentín A. Mercado. — Agustín Rodríguez Araya.

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Al solo efecto de posibilitar su vigencia desde el 1º de noviembre de 1958, autorizase al Poder Ejecutivo para que aplique el escalafón para el personal civil de la administración pública nacional aprobado por el decreto 9.530 del 7 de noviembre de 1958, y ratifiquense el artículo 10 de dicho decreto y los puntos 26, 27, 43 y 44 del escalafón instituido por el mismo.

Art. 2º — El Poder Ejecutivo queda facultado para fijar una nueva escala de remuneraciones y denominación de los empleos del personal al servicio del Estado, substituyendo o readaptando la que se halla en vigencia por el artículo 11 de la ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto, edición 1943), reemplazado por el artículo 23 del decreto ley 23.573/56. El Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable Congreso de lo que dispusiere en uso de la facultad que se le acuerda.

Art. 3º — El Poder Ejecutivo, mediante compensación de las autorizaciones totales que contengan los presupuestos en vigor, arbitrará los créditos necesarios para posibilitar la aplicación del escalafón a que se refiere el artículo 1º, quedando facultado para incorporar en dichos presupuestos, con cargo a los recursos respectivos, créditos en la medida que sea estrictamente indispensable para alcanzar los niveles que no puedan lograrse por vía de aquellas compensaciones.

Art. 4º — Con efecto a partir del 1º de noviembre de 1958, el Poder Ejecutivo podrá acordar al personal comprendido en el presupuesto general de la administración, no incluido en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional en virtud de lo establecido en los apartados c), e), f), h), k) y l) del artículo 2º del citado cuerpo legal, los beneficios que instituye el punto 26 del escalafón aprobado por el decreto 9.530/58.

Art. 5º — El Poder Ejecutivo modificará y adaptará los plazos y fechas que contiene el decreto ley 16.990/57, de presupuesto general de la administración nacional para 1957/1958 y sus complementarios 5.945/58, 5.965/58 y 6.285/58, cuyas partes dispositivas tienen aplicación durante el curso del ejercicio 1958/1959.

Art. 6º — Fijase en la suma de un mil millones de pesos moneda nacional (\$ 1.000.000.000) el crédito de emergencia para el ejercicio 1958/1959, correspondiente a la parte del presupuesto de gastos que se atienden con recursos de rentas generales.

Dicho crédito podrá destinarse durante el ejercicio, a reajustar cualquiera de las partidas contenidas en los anexos de esa parte del presupuesto, sea cual fuere el régimen que regule la forma de incrementación de las mismas, siempre que tales anexos no admitan compensaciones internas que permitan resolver las insuficiencias producidas. El crédito de emergencia también podrá aplicarse en el ejercicio a la creación de nuevos conceptos de inversión.

Art. 7º — Fáculase al Poder Ejecutivo para introducir en el anexo Servicio de la Deuda Pública, las modificaciones y ampliaciones que fuesen necesarias para la normal atención de los servicios de intereses, amortización y demás gastos relativos a la deuda pública nacional durante el ejercicio 1958/1959.

Art. 8º — Establécese en la suma de un mil millones de pesos moneda nacional (\$ 1.000.000.000) el monto

máximo que el Poder Ejecutivo podrá anticipar a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con fondos del Tesoro nacional, durante el período 1º de enero al 31 de diciembre de 1959, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de la ley 14.070, para atender los respectivos planes de obras y trabajos públicos. Autorízase asimismo al Poder Ejecutivo para entregar a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con cargo de reintegro, las sumas que requieran para cubrir los déficit que irroguen las ejecuciones de sus presupuestos correspondientes al año 1959.

El Poder Ejecutivo queda facultado para hacer uso del crédito público en la medida necesaria para atender esos anticipos y entregas de fondos.

El presente artículo substituye el segundo párrafo del artículo 11 del decreto ley 16.990/57.

Art. 9º — El fondo de restablecimiento económico nacional, creado por el decreto ley 2.004/55 será aplicado para la atención de las finalidades a que se refiere dicho decreto ley y sus modificatorios 9.875/56.

Art. 10. — Deróganse los incisos: b) del artículo 15 del decreto ley 13.126/57; c) del artículo 14 del decreto ley 13.128/57; c) del artículo 13 del decreto ley 13.129/57 y h) del artículo 16 del decreto ley 13.130/57. A efectos del cumplimiento de las disposiciones de la ley de contabilidad, el Poder Ejecutivo previa su aprobación incorporará al presupuesto general de la administración nacional correspondiente al ejercicio 1958-1959 los presupuestos administrativos de las respectivas entidades descentralizadas.

Art. 11. — Substitúyese el texto del artículo 33 de la ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto - edición 1943), modificado por el decreto ley 5.169 de 1958, por el siguiente:

«Artículo 33. — Para la atención de los gastos que por disposición legal deben cubrirse con el producido de la negociación de empréstitos, el Poder Ejecutivo emitirá anualmente, con mención de las leyes que faculden su emisión, la cantidad necesaria de títulos de deuda pública interna o externa, que serán amortizados mediante sorteo a la par cuando la cotización sea a la par o sobre la par, y licitación o compra cuando la cotización sea abajo de la par, pudiendo realizar asimismo las operaciones de financiación transitoria que resulten necesarias, inclusive con el Banco Central de la República Argentina y demás instituciones bancarias oficiales mediante la utilización por parte de éstas de fondos que obtengan de préstamos o colocaciones provenientes del exterior. A esos efectos, facúltase a dichas instituciones bancarias para celebrar con el gobierno nacional los convenios respectivos, en forma independiente y al margen de las otras operaciones de crédito que puedan realizar con dicho gobierno, de acuerdo con las autorizaciones y limitaciones contenidas en las cartas orgánicas correspondientes.»

Art. 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Alfredo R. Vitolo. — Ricardo Lumi.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Prece. — El despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aplicación del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional y otros asuntos vinculados al presupuesto general de gastos de la Nación hace que tengamos oportunidad de concretar esta tarde una aspiración acariciada desde hace mucho tiempo por el personal civil de la administración pública, al darle los medios materiales necesarios para que pueda llevarse a la práctica dicho escalafón.

Este instrumento legal, cuyas normas están incluídas en el decreto del Poder Ejecutivo 9.530 del 7 de noviembre de 1958, contiene en su estructuración las normas generales de aplicación para la carrera administrativa.

En estos momentos en que el gobierno está empeñado en un plan de racionalización de la administración, tendiente a reducir los gastos públicos, debemos preguntarnos si es el instante oportuno para la aplicación de un escalafón de esta naturaleza. Podemos contestar afirmativamente por las siguientes razones: la implantación del orden donde no existe, la ponderación justa de los valores, la utilización de los elementos en los medios más óptimos para su mejor aprovechamiento, la distribución del trabajo en forma organizada y la creación de incentivos para obtener el mayor rendimiento de los esfuerzos son, sin lugar a dudas, principios básicos de la racionalización. Ello es lo que consagra, fundamentalmente, el escalafón aprobado por el Poder Ejecutivo.

En efecto: a través de dicho instrumento se introduce en la administración pública un factor regulador de las retribuciones de los agentes del Estado, que habrá de evitar el discrecionalismo y sus inmediatas consecuencias: el descontento, factor de perturbación social, y el despilfarro, factor de perturbación económica.

Asimismo, el erario público ganará con ello, pues la carrera y el progreso del agente se desarrollarán dentro de un marco medido y orgánico y se beneficiará también el servicio al asegurar el concurso de los más capaces y estimula su dedicación.

Estos principios han llevado al Poder Ejecutivo a propiciar la redacción del escalafón en cuestión, y al hacerlo ha puesto en evidencia esa identidad de intereses integrando la comisión respectiva con tres funcionarios del Estado y tres representantes del personal elegidos por intermedio de las entidades gremiales que lo agrupan. Dicha comisión, presidida por el señor director general del Servicio Civil de la Nación, luego de un detenido estudio de los antecedentes nacionales y extranjeros existentes en la materia, redactó su primer anteproyecto, que fue sometido a la consideración de los grandes organismos que integran la administración pública, en los cuales se desenvuelve la más variada gama de funciones y actividades.

Luego de los ajustes aconsejados se elevó el proyecto definitivo suscrito por la totalidad de los miembros de la comisión. Me voy a permitir citar un párrafo del informe, que considero elocuente.

Dice así: «La comisión descarta que el escalafón que eleva es perfectible, pero quiere hacer destacar que el juego de sus disposiciones y la ponderación de las clases y grados es armónico e introducirá un orden general imprescindible en la carrera administrativa, para lograr el perfeccionamiento gradual del servicio y llenar una sentida necesidad concurrente del Estado y sus agentes.»

Dicho proyecto, con ligeras enmiendas, fue luego aprobado por el decreto del Poder Ejecutivo 9.530/58. Este instrumento estructura el escalafón sobre los siguientes conceptos fundamentales:

Ambito. — Los efectos de este escalafón alcanzan a todos los agentes comprendidos en el Estatuto del Personal Civil, aun cuando en una primera etapa quedaren excluidos aquellos que pertenecieran a organismos para los cuales se hubiere aprobado un escalafón particular con posterioridad al 11/8/58, salvo que las medidas respectivas hubieren previsto la incorporación a este régimen.

Agrupamiento. — Establece seis grandes grupos de personal reunido por su orden, de acuerdo con la naturaleza e importancia de sus funciones, a saber: Clase A: personal superior, que comprende a los agentes que realizan funciones principales de dirección, ejecución, fiscalización o asesoramiento. Clase B: personal jerarquizado. Comprende el que ejerce la jefatura de dependencias subordinadas a las órdenes de la clase A. Clase C: personal profesional. Se agrupa en esta clase a los profesionales universitarios que desempeñen funciones reservadas a quienes posean el respectivo título profesional. Clase D: personal técnico especializado y administrativo. Comprende el personal que no tiene a su cargo jefatura alguna y realiza tareas administrativas, técnicas o especializadas principales, complementarias, auxiliares o elementales. Clase E: personal de maestranza y obrero. Comprende el que realiza tareas de saneamiento, de producción y conservación, reparación, construcción y atención de edificios, muebles, maquinarias, instalaciones, herramientas, útiles, automotores, embarcaciones, etcétera. Clase F: personal de servicios auxiliares. Incluye a los que realizan tareas vinculadas con la atención personal de otros agentes o al público.

Dentro de estas clases se divide al agente en grupos, dentro de los cuales se incluyen funciones de naturaleza e importancia equivalentes, de tal manera que cada uno de ellos esté

subordinado a un orden de ponderación y progreso uniforme.

Carrera. — La carrera, que se define como el progreso del agente en las clases y grupos, está condicionada a la obtención de un módulo determinado, que es el puntaje de calificación anual que el agente debe obtener para alcanzar su pase a la categoría superior.

Es decir que el ascenso del personal estará determinado por la calificación de aptitudes, habiéndose previsto la retrogradación por calificación deficiente, e incluso la cesantía cuando el agente durante dos periodos consecutivos no levantara el puntaje que determinara su rebaja de categoría.

Con ello se procura mantener el constante nivel de rendimiento entre el personal y la promoción de los más capaces. En este empeño es oportuno hacer destacar que se ha desterrado el sistema del ascenso vegetativo por antigüedad. El progreso del agente dentro del grupo, a través de las distintas categorías que lo integran, no es la única forma de progreso o ascenso, ya que existe otra, que quizá sea la más importante, que es el ascenso a los cargos superiores. En efecto, el sistema a que nos hemos referido tiende a lograr el perfeccionamiento gradual del agente dentro de la función. Pero, al margen de ello, existe la necesidad de proveer los cargos superiores de la escala jerárquica con aquellos que evidencien mayor capacidad e idoneidad para los mismos. Y esto es lo que se denomina en el escalafón «cambio de clase o grupo». Es así que, producida una vacante de clase o grupo, se procede a una selección de aspirantes mediante el correspondiente llamado a concurso, en el cual pueden participar, en primer grado, los agentes, pertenecientes al ministerio donde se haya producido la vacante, que reúnan durante los dos últimos años un promedio de calificación no inferior a siete puntos. Sólo fracasado este primer concurso, se realizará otro abierto, en el cual podrán intervenir empleados de otros ministerios e incluso personas ajenas a la administración nacional.

El escalafón prevé en forma detallada cómo se convocará a estos concursos para las distintas «clases» —que podrán ser de antecedentes o de oposición—; los medios y plazos obligatorios para su difusión; las condiciones exigidas a los candidatos; el orden de prioridad a igualdad de méritos, etcétera, en forma tal de asegurar las mayores garantías de seriedad e imparcialidad de las pruebas respectivas.

Obvio es destacar que en este punto radica quizás el mayor aporte que por vía de este escalafón se brinda no sólo como garantía de la carrera del agente, sino también como instrumento de perfeccionamiento del servicio. Es tal vez éste uno de los pocos regímenes que han implantado con tan alta elevación de miras una norma de esta naturaleza para la provisión de

cargos. Ello permitirá integrar los cuadros de la administración nacional con personal con solvencia técnica formado en sus propias filas, lo que equivale a decir, nutrido de la experiencia necesaria para hacer más eficiente su desempeño y con los conocimientos y grados de capacitación adquiridos mediante un constante esfuerzo de superación, alentado por tan promisoría perspectiva.

Ingreso. — En este capítulo se fijan las condiciones que deben acreditar los aspirantes para el ingreso a la administración nacional en las distintas «clases» y «grupos». El principio de la idoneidad, consagrado genéricamente en nuestra Constitución bajo la inspiración de la célebre *Declaración de los Derechos del Hombre*, según la cual todos los ciudadanos pueden ejercer los cargos públicos sin otros requisitos que «sus virtudes y sus talentos», es desarrollado en forma armónica y ajustado al propósito de jerarquizar la función pública mediante el concurso de personas idóneas.

Retribuciones. — Muchas son las teorías elaboradas por los hombres representativos de las distintas corrientes ideológicas acerca del salario. Desde aquella que parte del principio de la ley de la oferta y la demanda, que Cobden explicaba gráficamente diciendo: «Cuando dos obreros corren en busca de un patrón, los salarios bajan; y cuando dos patrones corren en busca de un obrero, los salarios suben», pasando a la llamada ley de bronce, con Lasalle, a la de la productividad, con Walker y Stanley Jevons, a la aritmética fórmula de Thünen, según la cual el salario estaría dado por la raíz cuadrada del valor de las necesidades del trabajador por el de la productividad del mismo, y llegando a la famosa encíclica *Rerum Novarum*, de León XIII, completada por la encíclica *Quadragesimo Anno*, de Pío XI, nos encontramos con que cada una de ellas enfoca el problema en forma unilateral. Las que contemplan el punto de vista económico descuidan el social, y viceversa; pero la concepción del moderno derecho laboral ha llevado a amalgamar armónicamente los intereses económicos y sociales para obtener una fórmula mixta a través de la cual, sin lesionar las legítimas aspiraciones de las empresas, se asegure al trabajador y su familia un standard de vida digno y decoroso.

Tal es el principio que evidentemente ha inspirado la fijación de las normas contenidas en este escalafón y, en especial, la determinación del sueldo mínimo, desde que su obtención ha sido el producto de la comparación de los índices de elevación de costo de vida establecidos por la Dirección Nacional de Estadística y Censos, sobre la base de un índice 100 para el año 1943. Partiendo de dicho sueldo mínimo, que se ha fijado en 2.600 pesos, se integran luego las escalas de categorías correspondientes a los

distintos grupos que componen cada clase, en proporción a la importancia y naturaleza de las respectivas funciones, especialidades y jerarquías. Es decir, que habiéndose asegurado el salario vital mínimo, las distintas escalas posteriores tienden a ponderar no sólo ya necesidades de subsistencia sino el mayor esfuerzo requerido para el cumplimiento de la tarea.

Pero, a fin de que dicho propósito tenga permanente vigencia, se da, además, carácter móvil al salario, de tal manera que pueda ser actualizado automáticamente, en consonancia con las elevaciones del costo de vida, habiéndose fijado a este respecto como índice de actualización el incremento que alcance al 20 por ciento. De más está señalar que con esta medida se concreta una antigua formulación programática y se consagra con carácter positivo una verdadera conquista social.

Se complementa, además, el concepto enunciado con las asignaciones por salario familiar y por título. El primero de los aspectos señalados, si bien no constituye una innovación en sí, ya que se trata de una institución social definitivamente incorporada a nuestra legislación, tiene, en cambio, el mérito de integrar totalmente el principio en que se funda, al comprender también en sus alcances, además de la esposa y los hijos, a los padres y hermanos impedidos y a cargo del agente. Se suprimen con ello las actuales normas discriminatorias del beneficio en función del sueldo, por cuanto la práctica ha revelado inúmeros casos de notorias injusticias, especialmente las producidas frente a la comparación de agentes ubicados en ambos extremos de las limitaciones, produciéndose así el absurdo de que el ascenso otorgado a un empleado le ha significado a éste la reducción de sus ingresos. Otra razón que justifica la eliminación de limitaciones en materia de sueldos es que este subsidio tiende a diferenciar a los agentes con carga de familia de aquellos que no las poseen, y es evidente que esta circunstancia reza para todos por igual.

En lo que se relaciona con la bonificación por título, debe advertirse que ella rige exclusivamente para quienes se desempeñen en funciones inherentes a su especialidad. No están comprendidos en el beneficio los agentes sin cargo jerárquico para cuyas funciones se exige título profesional universitario, por cuanto ellos están agrupados en una clase especial, cuyas retribuciones compensan ya esa circunstancia. El objeto de esta bonificación es el de retribuir el mayor aporte de conocimientos que el agente hace a la función y constituir a la vez un estímulo para la capacitación.

Como ya se ha dicho, las distintas vacantes que se produzcan en lo sucesivo en los organismos comprendidos en este escalafón serán llenadas por el sistema de concursos.

Se establece en este capítulo qué medios se utilizarán, optativa y obligatoriamente, para la difusión de los llamados a concurso, a fin de asegurar la mayor competición de candidatos; asimismo, se determinan las especificaciones generales que deberán contener dichos llamados y la obligación de formular el correspondiente programa de exámenes para las especialidades que se desenvuelvan en cada organismo. Por último, se alude al funcionamiento y constitución de las juntas examinadoras.

El tema de las calificaciones se desarrolla sobre principios que garantizan la ecuanimidad y seriedad de ellas, para lo cual se establece su formulación por intermedio de tres instancias jerárquicas fijándose los plazos en que debe expedirse cada una de ellas.

Dichas calificaciones, que van de uno a diez puntos, prevén la retrogradación del agente cuando en dos períodos consecutivos él no hubiera alcanzado cuatro puntos, y la cesantía si tal situación persiste en un tercer período.

Para la calificación se toman en cuenta: el concepto, que refleja la capacidad, eficiencia y condiciones personales del empleado; y los antecedentes, con los que se valoran, sobre la base de coeficientes, las sanciones, inasistencias, impuntualidades, menciones, etcétera. De la combinación de estos dos rubros surgirá una calificación integral y definitiva.

Para hacer efectivo el mejor cumplimiento de los fines perseguidos por el escalafón, y el respeto de los legítimos derechos de los agentes, se ha previsto el funcionamiento de juntas de calificaciones en cada repartición, integradas por representantes de ésta y del personal, elegidos los últimos por votación directa y secreta de los interesados. En forma concisa se desarrolla el régimen de funcionamiento de estas juntas y se fija su competencia en materia de calificaciones, escalafonamiento, ascensos, orden de méritos y menciones.

Estas son las normas generales del escalafón para el personal civil de la administración pública, en el cual el gobierno ha superado la posición del escalafón que estaba en vigencia por el decreto 6.666, de modo que esta circunstancia, y con el consentimiento y aprobación de las partes estatal y gremial, significa que han quedado satisfechas las aspiraciones de ambos sectores, por lo que podemos afirmar que el escalafón cumple el anhelo y la esperanza de todos los servidores del Estado.

Pero este escalafón no puede ser aplicado porque el presupuesto rige en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la ley de contabilidad, o sea, que lo que está en vigencia es el presupuesto para 1957/58. Por eso, a través de las normas que se dan para la aplicación de este escalafón, también se dan las normas necesarias para que el Poder Ejecutivo pueda ma-

nejarse en el ejercicio iniciado el 1º de noviembre del corriente año y mientras no se sancione el proyecto de presupuesto oportunamente enviado por el Poder Ejecutivo y que tuvo entrada en la Honorable Cámara hace ya mucho tiempo.

Por el artículo 1º de este despacho se resuelve el problema de la fecha de aplicación del estatuto. El decreto 9.530, aprobatorio del estatuto, fue dictado el 7 de noviembre de 1958, y como el estatuto debe aplicarse desde el comienzo del ejercicio financiero, o sea a partir del 1º de noviembre de 1958, se autoriza al Poder Ejecutivo para aplicarlo a partir de la fecha indicada en último término.

El Poder Ejecutivo no ha podido dejar de contemplar, a través del artículo 10 del decreto 9.530/58, la circunstancia de que frente a razones especiales que hacen a la conducción de los planes de gobierno y por particulares motivos de jerarquización o antecedentes que así lo justifiquen, se deban disponer designaciones de personal al margen del régimen escalafonario aprobado.

Tal temperamento se aparta del principio riguroso del estatuto aprobado por el decreto 6.666/57, que exige que el ingreso se opere siempre de acuerdo con el régimen escalafonario. Las circunstancias expuestas precedentemente aconsejan el apartamiento de principios rigurosos consagrados en el decreto mencionado, que motiva la convalidación del artículo 10 en análisis.

En cuanto a la ratificación de los distintos puntos del escalafón, responde a lo que para cada uno se explica seguidamente.

El artículo 1º del despacho dice: «Al solo efecto de posibilitar su vigencia desde el 1º de noviembre de 1958, autorizase al Poder Ejecutivo para que aplique el escalafón para el personal civil de la administración pública nacional aprobado por el decreto 9.530, del 7 de noviembre de 1958, y ratifiquen el artículo 10 de dicho decreto y los puntos 26, 27, 43 y 44 del escalafón instituido por el mismo.»

El punto 26 del escalafón tiene el siguiente significado: el decreto 14.984/57 instituye una asignación familiar para el personal civil de la administración nacional con hijos menores de 15 años o mayores de esa edad pero incapacitados. Dicho beneficio alcanza hasta 5.400 pesos.

Como el punto 26 del escalafón, aun cuando mantiene el mismo importe del beneficio —150 pesos mensuales—, amplía su aplicación, pues ahora alcanzaría a los hijos menores de 18 años de edad, así como también a los padres y hermanos impedidos o hermanos menores de 18 años que se encuentren a cargo del agente, y, además, hace extensivo el beneficio a todo el personal sea cual fuere su sueldo, necesariamente requiere ratificación legal.

Punto 27. — Su convalidación legal responde al hecho de que la parte *in fine* de este punto suprime la liquidación al personal del aumento de emergencia acordado por la ley 14.456. Ello es así en virtud de que las gamas de sueldos que contiene el escalafón aprobado ya involucran aquel aumento de emergencia legalmente dispuesto, por lo cual procede su eliminación.

Punto 43. — El Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional aprobado por el decreto ley 6.666/57, estableció en su artículo 43 que en cada ministerio y organismo no perteneciente a la jurisdicción central del mismo funcionase una junta de calificaciones para el personal.

La experiencia práctica en esta materia aconseja que cada repartición u organismo tenga su propia junta de calificaciones, de manera que para resolver en el sentido indicado es imprescindible modificar ese aspecto del artículo 43 del decreto ley 6.666/57, lo cual se logra con la ratificación del punto que se analiza.

Punto 44. — La última parte del artículo 43 a que se hizo mención establece condiciones rigurosas para el personal que debe integrar las juntas de calificación, o sea 30 años de edad como mínimo y diez años de antigüedad, por lo menos, en la administración.

La posibilidad nada improbable por cierto de que en algunas dependencias, especialmente las de más reciente creación, no existan agentes en las condiciones enunciadas respecto a la antigüedad de servicios, lo cual dejaría al organismo sin junta de calificación, obliga a rever la cuestión. La modificación consiguiente se obtiene mediante la convalidación legal del punto 44 del escalafón aprobado por el Poder Ejecutivo.

Por el artículo 2º del despacho el Poder Ejecutivo queda facultado para fijar una nueva escala de remuneraciones y denominación de los empleos del personal al servicio del Estado, substituyendo o radaptando la que se encuentra en vigencia por el artículo 11 de la ley 11.672 (complementaria permanente del presupuesto —edición 1943—), reemplazado por el artículo 23 del decreto ley 23.573/56.

Sr. Hernández Ramírez. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Prece. — Sí, señor diputado.

Sr. Hernández Ramírez. — Desearía saber si la norma legal tendrá aplicación con retroactividad al 1º de noviembre...

Sr. Prece. — El decreto ley fue dictado con fecha 7 de noviembre. Para aplicarlo con retroactividad, evidentemente, hay que autorizarlo legalmente.

Sr. Hernández Ramírez. — Se me ha informado que hay designaciones posteriores al 1º de noviembre que no están de acuerdo con las exigencias que ha citado el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en su exposición. Se trata de designaciones para las cua-

les no se ha llamado a concurso, no ha intervenido el tribunal calificador, etcétera, y la aplicación del decreto ley 23.573/56 significaría rever esas designaciones para ser nuevamente realizadas.

Sr. Prece. — Las designaciones fueron hechas con previa autorización legal. En ese momento no estaba el decreto en vigencia. Por otra parte, no podemos encarar el problema de rever nombramientos realizados en ese término. ¿El señor diputado supone que ha habido nombramientos?

Sr. Hernández Ramírez. — Tengo información en ese sentido. Cuando se trató en la Cámara la suspensión del Estatuto del Personal Civil se sostuvo, por parte del miembro informante, que debía respetarse el escalafón y hacerse los concursos que se establecen. Dentro del personal civil de la Nación, entiendo que se han hecho designaciones no teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes.

Sr. Heredia (B. M.). — ¿Propone una revisión de los nombramientos el señor diputado?

Sr. Hernández Ramírez. — No, señor diputado. Formulaba simplemente una pregunta. Es decir, si la relación que acaba de hacer el señor presidente de la Comisión de Presupuesto implicaba que las designaciones que no se hubiesen realizado de acuerdo con esta ley deberán ser revistas para adecuarlas a las disposiciones respectivas.

Sr. Prece. — El artículo 2º del despacho significa lo siguiente: la ley 11.672, llamada «Complementaria Permanente de Presupuesto», ha venido rigiendo a través del tiempo la escala de remuneraciones y la denominación de los empleos de los agentes comunes de la administración pública nacional.

Los agrupamientos del personal civil bajo denominaciones de clases y grupos distintos de los que hasta ahora han estado en aplicación, y las nuevas escalas de retribuciones que establece el escalafón para aquel personal, imponen la necesidad de substituir o readaptar la gama de sueldos y denominación de cargos que contiene aquella ley 11.672 (artículo 11).

El Poder Ejecutivo, al aplicar el escalafón que ha aprobado, tendrá que reordenar la escala y denominación de empleos, pero para ello requiere la pertinente autorización legal, que es la que prevé el artículo 2º del proyecto de ley.

La parte final del mismo artículo impone al poder administrador la obligación de dar cuenta al Poder Legislativo de la forma en que utilice la facultad que este último le delega.

El artículo 3º es el que ha de permitir la efectiva materialización del escalafón para el personal civil de la administración nacional, aprobado por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 9.530/58.

El artículo 6º de dicho decreto condicionó la aplicación del escalafón al arbitrio de los cré-

ditos necesarios para atender su financiación, parte de los cuales debe provenir de la afectación de vacantes con que cuentan los organismos estatales.

El resto de aquellos créditos, en la medida que sea factible, tendrá que arbitrarse mediante las compensaciones que disponga el Poder Ejecutivo en los presupuestos en vigor, utilizando para ello todos los sobrantes y disponibilidades existentes en las partidas, y sólo cuando con ello no pueda alcanzarse el nivel necesario podrá incorporar créditos suplementarios en la medida que sea estrictamente indispensable.

El proceso reseñado es el que contempla precisamente el artículo 3º del proyecto de ley.

Artículo 4º — En virtud de que el escalafón del personal civil del Estado sólo alcanza a los agentes comprendidos en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por el decreto ley 6.666/57, cuyo artículo 2º exceptúa taxativamente a determinadas clases de agentes, resulta que esos mismos agentes quedan al margen del subsidio familiar por cónyuge, hijos, etcétera, que regla el punto 26 del escalafón instituido por el decreto 9.530/58.

Ninguna razón valedera se opone, ciertamente, a que determinadas clases de agentes resulten excluidas de los beneficios del comentado subsidio familiar, sobre todo cuando esos personales revisten las mismas características que son comunes a los restantes servidores públicos.

Inspirado, pues, en elevados propósitos de equidad y justicia, el artículo 4º bajo análisis posibilita acordar las bonificaciones familiares a ciertos sectores de agentes que sin esta autorización no podrían percibirlos. Ellos son: personal integrante de los gabinetes de ministro, secretarios de Estado y Presidencia de la Nación; personal del Servicio Exterior de la Nación; personal militar y de seguridad y defensa; personal comprendido en el Estatuto del Docente, y personal de organismos que por la naturaleza propia de sus funciones tenga un régimen escalafonario especial.

En el artículo 5º se establece, por imperio del artículo 13 de la ley de contabilidad, que encuéntrase en vigor en el corriente año fiscal 1958/59, al 1º de noviembre de 1958, los créditos presupuestarios autorizados hasta el 31 de octubre último. Se trata, simplemente, de la prórroga automática a regir en el nuevo año financiero del presupuesto general de la administración nacional, que tuvo aplicación en el anterior ejercicio, que originariamente había sido aprobado por el decreto ley 16.990.

Pero es del caso tener en cuenta que el presupuesto federal que rigió en el período fiscal 1957/58, estaba constituido, además de la parte

de créditos propiamente dicha, por un conjunto de disposiciones que completaban la parte positiva del mencionado decreto ley y que eran indispensables, como complementarias, para posibilitar la marcha y la ejecución adecuada del presupuesto.

Todas esas disposiciones del decreto ley 16.990 y sus complementarios, 5.945/58, 5.961/58 y 6.285/58, tienen que ser igualmente aplicadas en el nuevo ejercicio 1958/59, para posibilitar el normal desarrollo del presupuesto prorrogado, y a ello tiende, precisamente, la norma del artículo 5º del proyecto, al propio tiempo que, por razones simplemente formales de adecuación de los textos respectivos a las necesidades del año fiscal recientemente iniciado, se impone autorizar al Poder Ejecutivo para que modifique y adapte las disposiciones del recordado decreto ley 16.990 y sus complementarias.

La ley de contabilidad de la Nación en su artículo 5º regla la existencia de un crédito global de emergencia en la ley anual de presupuesto, para permitir al Poder Ejecutivo solucionar algunas insuficiencias de créditos que pudieran presentarse durante su gestión y administración.

Esta disposición, que está contemplada en el artículo 6º del despacho, se refiere al principio general a que responde el artículo 6º del proyecto de ley en consideración, con las características particulares, en este caso, de que tal crédito global permitirá al Poder Ejecutivo reforzar cualquiera de las partidas del presupuesto prorrogado en vigor, evitando las dificultades propias de una insuficiencia de crédito que pueda ocurrir durante la ejecución presupuestaria del año fiscal.

La cifra de mil millones de pesos que establece el despacho para los créditos de emergencia de 1958/1959, y que se prevé en este artículo, cumple debidamente con el principio de la proporcionalidad sobre el total general de las partidas a que puede ser aplicado (artículo 5º de la ley de contabilidad), puesto que sólo representa el 2,1 por ciento de los créditos atendidos con rentas generales vigentes al 31 de octubre de 1958.

Este crédito, que parece una suma importante, tiene desde ya afectada una parte para la atención de las universidades argentinas. En el proyecto de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo para el ejercicio 1958/1959 está asignada una partida de ochocientos millones de pesos para las universidades. Una parte de esa partida será atendida con el crédito de emergencia de mil millones de pesos.

Sr. Hernández Ramírez. — Estarán muy pobres nuestras universidades para poder progresar.

Sr. Domingorena. — Se asignan ochocientos millones más que el año pasado.

Sr. Hernández Ramírez. — El Estatuto del Docente trae a las universidades una complicación

financiera que no sé en qué forma se sobrelevará.

Sr. Prece. — Hay que aclarar que la partida de emergencia tiene vigencia hasta que se sancione el presupuesto general de gastos para el ejercicio 1958/1959, porque la disposición tiende a suplir las necesidades del Poder Ejecutivo para atender las demandas de crédito en el interregno que va hasta la sanción del presupuesto definitivo.

Por eso digo al señor diputado que no se preocupe, porque en la sanción del presupuesto podrá resolverse el problema financiero de la universidad.

Sr. Hernández Ramírez. — Agradezco el consejo que me da el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de que no me preocupe. Y, evidentemente, creo que no estaría en la realidad del problema si me desprecupara.

Sr. Prece. — El Poder Ejecutivo va a tener en cuenta las necesidades financieras de las universidades, y les daremos soluciones.

Sr. Hernández Ramírez. — No me cabe la menor duda.

La realidad, que conocen muy bien el señor diputado y los demás integrantes de esta Cámara, es que nuestras universidades estatales no van a poder contar con los recursos necesarios para desarrollar sus actividades.

Sr. Prece. — Para poder atender normalmente los servicios de intereses y amortización y demás gastos relativos a la deuda pública nacional es necesario introducir, en el curso del ejercicio financiero, modificaciones en las distintas partidas que integran el anexo presupuestario correspondiente (servicios de la deuda pública). Esas modificaciones son, precisamente, las que se autorizan por este artículo 79. Sabido es que el cálculo de las anualidades de los diversos impuestos responde a fórmulas matemáticas que no admiten modificación. Este principio, sin embargo, se cumple únicamente respecto de aquellos empréstitos emitidos y colocados totalmente, pero no, en cambio, por ejemplo, cuando series de títulos u obligaciones en vías de colocación —como ocurre con los «crédito argentino interno 1958» y «obligaciones de previsión social 1958»—, en cuyo caso los servicios deben ser reajustados sobre la base del monto de cada serie que efectivamente haya sido colocado.

Por otra parte, la reactivación del mercado de valores supone, además, la elevación del tipo de interés de los papeles públicos en circulación, acorde con el momento actual de la plaza, circunstancia que habrá de significar, en caso de concretarse y en la medida en que se concrete, erogaciones mayores en el anexo de la deuda pública, cuya cuantía tampoco puede preverse por anticipado.

El régimen de anticipos de fondos del Tesoro nacional a las provincias y municipalidades de

Buenos Aires para que atiendan sus planes de obras y otros compromisos —déficit de presupuesto y deuda flotante— es ya suficientemente conocido. Sólo estimo oportuno recordar que la justificación de este sistema, apoyado en las disposiciones de la ley 14.070, ha tenido su origen en que los gobiernos locales, al no hacer uso de su propio crédito público como recurso normal para la atención de sus obras y consolidación de sus deudas, deben obtener un aporte del Estado federal.

El artículo 8º que se comenta no es nuevo. En el decreto ley 16.990/57, del presupuesto 1957/58, existía una disposición similar; pero para el ejercicio 1958/59 se estima necesario ampliar la ayuda de la Nación en el sentido de cubrir también los déficit que irroguen la ejecución de los presupuestos locales y la extensión del aporte a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

El decreto ley 16.990/57 sólo contenía una autorización para financiar los planes de obras públicas de las provincias. De manera que para satisfacer requerimientos por otros conceptos fue necesario apelar a disposiciones legales especiales como la ley 14.461, sancionada en agosto del año en curso.

El artículo bajo análisis, al condensar la contemplación de todas estas situaciones, se hace suficientemente amplio como para posibilitar una adecuada ayuda federal a los órdenes locales.

Con motivo de las disposiciones cambiarias adoptadas el 28 de octubre de 1955; por decreto ley 2.004/58 se creó el Fondo de Restablecimiento Económico Nacional, con destino «al adelanto tecnológico y económico de la producción agropecuaria argentina y al pago de subsidios transitorios que eventualmente se establezcan para atenuar la incidencia de los precios de aquella sobre el nivel del costo de la vida».

Para administrar el Fondo de Restablecimiento Económico y formular el plan de inversiones para someterlo a la aprobación del Poder Ejecutivo, por decreto 13.553/56, modificado por el 19.357/56, se creó un Consejo de Administración que funcionó hasta el 22 de abril de 1958, fecha a partir de la cual quedó disuelto por disposición del decreto ley 5.383/58. A partir de entonces, el Ministerio de Hacienda —ahora Secretaría de Hacienda— tiene a su cargo toda cuestión referente al movimiento y disposición de los recursos del Fondo de Restablecimiento Económico Nacional (artículo 2º, decreto ley 5.383/58).

Con posterioridad al decreto ley 2.004/55 se dictaron otras medidas complementarias (decretos leyes) que ampliaron el destino de los recursos provenientes del citado Fondo, hasta que finalmente el decreto ley 5.383/58, del 22 de abril de 1958, al propio tiempo que dispuso la disolución del Consejo de Administración del

Fondo de Restablecimiento, dejó establecido que los recursos de este último sólo pueden aplicarse para financiar el plan de caminos de fomento y las necesidades de la Corporación Nordpatagónica.

Resulta indispensable modificar ahora el destino del fondo, reponiendo las finalidades de los decretos leyes 2.004/55 —adelanto tecnológico y económico de la producción, y subsidios—; 9.875/56 —caminos de fomento agrícola—, y 10.487/57 —desarrollo de las fuentes de la energía—. La ayuda financiera a la Corporación Nordpatagónica no tiene objeto en estos momentos, pues se trata de un organismo suprimido en virtud de la ley 14.489.

Por el artículo 10 del despacho se entra a considerar lo siguiente: al hacerse cargo del gobierno, el Poder Ejecutivo se encontró frente al hecho de que los presupuestos administrativos de los cuatro bancos oficiales, Central de la República Argentina, de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, e Industrial de la República Argentina, no formaban más parte del presupuesto general de la administración nacional en razón de que sus respectivas cartas orgánicas conferían a los directorios correspondientes la atribución de darse sus propios presupuestos.

Evidentemente, tal exclusión rompe con el principio técnico y tradicional de la universalidad del presupuesto, ya que no parece admisible que organismos tan importantes como los que integran el sistema de instituciones oficiales de crédito se mantengan al margen del presupuesto nacional, mientras todas las demás reparticiones integran dicho presupuesto.

En tal virtud, el artículo 10 del proyecto de ley que se examina deroga las partes pertinentes de las cartas orgánicas de los bancos oficiales, capacitando al Poder Ejecutivo para que apruebe el plan de gastos administrativos de cada uno de ellos y los incorpore definitivamente al presupuesto general de la administración nacional.

El artículo 11 se funda en lo siguiente: la sustitución del texto del artículo 33 de la ley 11.672 obedece, en su primera parte, a una simple medida de ordenamiento, pues se eliminan las referencias que contenía sobre tasa máxima de interés y duración de los empréstitos, en concordancia con lo dispuesto en tal sentido por el decreto ley 5.169/58.

En lo que se refiere a las operaciones financieras transitorias a realizar con bancos oficiales, que se agrega al primitivo texto del artículo 33, ello responde a la necesidad de prever una modalidad nueva de crédito que podrá llevarse a cabo con el Banco Central y otros bancos oficiales en los casos en que éstos llegasen a concertar en el exterior operaciones de préstamos o colocaciones de valores que pudieran derivarse hacia el Tesoro nacional bajo la forma

de operaciones transitorias a convenir en cada caso, según lo autoriza el texto propuesto.

Con estas consideraciones, señor presidente, dejo fundado el despacho que se refiere a la aplicación del escalafón y a las normas presupuestarias que le permitirán al Poder Ejecutivo manejarse transitoriamente, mientras se dicte el presupuesto definitivo, a través de la vigencia del ejercicio 1957/58. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Armendáriz. — Señor presidente: no seguiré al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en su extensa e ilustrada exposición relacionada con el asunto en discusión.

Estamos conformes, en general, con el escalafón para el personal de la administración pública nacional.

Queremos decir que nos parece justiciera la aplicación del escalafón, pero como nosotros firmamos en disidencia parcial este despacho, tenemos necesidad de expresar las razones de esa disidencia.

El escalafón civil de la Nación tiene dos aspectos que lo hacen muy recomendable. Por una parte, dentro de la organización que establece, permite a los funcionarios que encuentren el estímulo necesario en su labor, y por otra parte les acuerda al propio tiempo las garantías de estabilidad. De este modo se asegura para la función pública la colaboración de los mejores y más capacitados funcionarios, con lo cual se contribuye al servicio eficiente de la Nación.

Pero tiene este despacho algunos otros aspectos que no podemos compartir de ninguna manera. Se da al Poder Ejecutivo de la Nación una autorización en blanco que nosotros entendemos constituye una declinación de las facultades del Congreso. Se le acuerda una autorización en blanco para gastar indiscriminadamente, en contra de los principios de la buena doctrina, que establece la limitación incluso para las situaciones de emergencia.

Nos parece bien la autorización de mil millones de pesos como máximo que se confiere al Poder Ejecutivo para prestar a las provincias. Pero no nos parece bien que, como una suerte de cheque en blanco, se deje en manos del Poder Ejecutivo una serie de facultades para concurrir a solventar gastos. Así, por ejemplo, en la parte final del artículo 6º se dice: «El crédito de emergencia también podrá aplicarse en el ejercicio a la creación de nuevos conceptos de inversión.» Este es un concepto un tanto obscuro, y yo espero para bien de la República que sea prudentemente empleado para atender al ordenamiento de la economía y de las finanzas de la Nación, pero que no sirva como instrumento para crear nueva burocracia.

He deseado expresar sintéticamente estas observaciones, reiterando, como dije al principio, que adherimos a la implantación del escalafón para el empleado civil de la Nación, pero que no nos agrada esta concesión de facultades en blanco al Poder Ejecutivo.

Estas son las razones por las cuales hemos firmado el despacho en disidencia, reservándonos para la discusión en particular el proponer las reformas que consideramos indispensables.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar en general el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

— Resulta afirmativa de 92 votos; votan 96 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración en particular.

Se va a votar. De acuerdo con la práctica establecida, serán enumerados los artículos, y los que no se observen se darán por aprobados.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 1º.

— Se aprueba. Igualmente se aprueban los artículos 2º al 5º.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 6º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Armendáriz. — Ya hemos formulado nuestros reparos a este artículo cuando se discutió en general el despacho que consideramos.

De acuerdo con el texto del artículo 6º del despacho, se da una autorización al Poder Ejecutivo para disponer de un crédito de emergencia para el ejercicio 1958/1959 con el objeto de atender gastos. Consideramos que otorgar dicha autorización implica declinar las facultades del Congreso. Por ello recurro al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para ver si es posible redactar el artículo en forma distinta a la que figura en el despacho, eliminándose así una autorización global.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda.

Sr. Secretario de Hacienda. — Señor presidente: el artículo que llama la atención al señor diputado, y del que pide una modificación, hace uso de una de las disposiciones de la ley de contabilidad, que permite prever en el presupuesto un monto equis global, sin fijar límite en la ley de contabilidad, pero que tiene origen en esa misma ley. Es con el objeto de facilitar las gestiones al Poder Ejecutivo cuando deba

atender necesidades que no cuentan con crédito específico para ellas.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Armendáriz. — Entiendo perfectamente lo que contesta el señor secretario, aunque sigo pensando que esto es una delegación legislativa. La Constitución establece que tanto la imposición como el gasto son facultades privativas del Poder Legislativo. Recojo lo que dice el señor secretario de Hacienda, con la esperanza de que así como alguna leyenda dice que el camino del Infierno está empedrado de buenas intenciones, también en este caso la ley puede estarlo de la misma manera.

Votaremos en contra de este artículo.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda.

Sr. Secretario de Hacienda. — Señor presidente: quiero significar al señor diputado que las intenciones con que han sido colocadas todas las disposiciones en este proyecto de ley son buenas. Al señor diputado probablemente le llame la atención el hecho de que figure una partida global que, como acabo de aclarar, puede figurar porque es facultad de la misma ley de contabilidad, que es la ley de fondo de la administración pública.

Con este crédito se deberán atender necesidades de algunos servicios durante el año 1959, que todavía no tienen determinado el monto definitivo. Caso típico son las universidades nacionales, a las cuales habrá que cubrirles sus servicios en la medida en que éstas, durante el ejercicio del año 1959, tengan que ampliarlos o, por lo menos, cubrirlos con la mayor amplitud posible. Todos saben que los presupuestos de las universidades nacionales se financian en gran proporción, hasta la casi totalidad, por una contribución del Estado.

Necesita el Poder Ejecutivo este crédito para dar cumplimiento, en parte, a esa disposición, que es la fundamental. Repito que todas las disposiciones de este proyecto de ley son hijas de buenas intenciones.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Armendáriz. — En este artículo 6º hay una frase que dice así: «El crédito de emergencia también podrá aplicarse en el ejercicio a la creación de nuevos conceptos de inversión.» Quiero decir a la Cámara y al país que ésta es una redacción confusa, que permite cualquier cosa, como fijar sueldos o hacer gastos de otra naturaleza.

Esa ha sido la razón fundamental por la cual he pedido se tuviera en cuenta, si fuera posible, dar una mejor redacción a este artículo. Pero el tiempo apremia y nosotros no queremos hacérselo perder a la Honorable Cámara. Por eso

me concreto a decir que votaremos en contra del artículo 6º.

Sr. Pozzio. — Pediría al señor secretario, por lo menos para satisfacer la inquietud del señor diputado Armendáriz, que explique el sentido de la última parte del artículo 6º.

Sr. Secretario de Hacienda. — Es lógica la inquietud del señor diputado.

Hasta la fecha el Poder Ejecutivo no cuenta con el presupuesto sancionado para el ejercicio 1958/59. Por lo tanto, se está manejando con un presupuesto de prórroga, que tendrá que ir adecuando a las necesidades que se le presenten durante el ejercicio corriente.

La autorización contenida en el último párrafo del artículo 6º, tiene el propósito de que el Poder Ejecutivo pueda ir atendiendo las necesidades de la administración hasta tanto tenga la sanción del presupuesto definitivo para el ejercicio 1958/59. Esto no significa que el Poder Ejecutivo utilice totalmente ese crédito. Lo hará en la medida en que no pueda atender otras necesidades con las economías de ejecución del presupuesto.

El Poder Ejecutivo ha manifestado públicamente que es necesario aplicar un plan de economía y racionalización de la administración pública. Pero las necesidades que surjan en otros órdenes no pueden estar supeditadas al momento en que el plan vaya dando sus resultados y se vaya ajustando las cifras definitivas del presupuesto general de la Nación.

Por eso, el Poder Ejecutivo solicita la inclusión de este crédito de emergencia, en cumplimiento de la ley de contabilidad. Esa autorización le va a permitir atender todas las necesidades que se le puedan ir presentando en el curso del ejercicio, hasta tanto cuente con el nuevo presupuesto general de la Nación.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 6º.

—Resulta afirmativa de 89 votos; votan 95 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 7º.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 8º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Mercado. — Para ser consecuentes con nuestro punto de vista con respecto a las autorizaciones para gastos, vamos a votar en contra de este artículo, que autoriza al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de mil millones de pesos en concepto de anticipos a las provincias y a la municipalidad de Buenos Aires.

En otra oportunidad semejante a la actual, sostuvimos que en toda administración pública

medianamente ordenada es posible prever las necesidades de un ejercicio presupuestario. Por consiguiente, en estos pedidos de autorizaciones deben venir ya concretadas las cifras para cada una de las provincias y la municipalidad.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda.

Sr. Secretario de Hacienda. — Las expresiones del señor diputado son correctas, pero quiero señalar que no es el Poder Ejecutivo de la Nación el que ha de determinar a priori cuáles son las necesidades de las provincias. Las provincias irán planteando sus problemas en la medida en que se presenten y en la medida del volumen de esos problemas, y el gobierno nacional no tiene a su alcance medios para establecer a priori, por provincia, cuáles van a ser los resultados de sus presupuestos, los planes de inversión, sus necesidades.

Por eso se incluye la reforma global del crédito, y luego, de acuerdo con las posibilidades y análisis de esos presupuestos, de esos déficit y de esas necesidades, el Poder Ejecutivo otorgará los préstamos o anticipos correspondientes.

Sr. Mercado. — Agradezco las aclaraciones formuladas por el señor secretario, pero no me convencen.

Las provincias y la municipalidad de Buenos Aires —interesadas en afrontar déficit presupuestarios o realizar obras— han de ser permeables a cualquier insinuación del poder central en el sentido de que formulen las previsiones necesarias para una buena administración de sus respectivas jurisdicciones. Además, este procedimiento de autorizaciones globales se presta para el discrecionalismo del poder central y nosotros, inspirados por un sano federalismo, tenemos que extremar nuestro celo en estos aspectos.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 8º.

—Resulta afirmativa de 86 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 9º.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 10.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Mercado. — En este artículo, señor presidente, se derogan disposiciones de las cartas orgánicas de los bancos Industrial de la Nación, Hipotecario Nacional y Central de la República Argentina, restringiendo la función de los directorios de esas instituciones.

En el caso del Banco Industrial de la Nación se deroga el artículo 16, que establece las facultades del directorio para orientar la labor

de la institución, de acuerdo con la política económica que fije el gobierno nacional para establecer las normas de gestión del banco, etcétera. En cambio, en las otras cartas orgánicas solo se suprime un inciso relacionado con las facultades de los directorios respectivos. Desearía que el señor miembro informante nos dé razón de estas derogaciones que han llevado a cercenar las facultades de los respectivos directorios de esas instituciones para el manejo y administración de sus respectivos bancos, no obstante de que deben hacerlo de acuerdo con la orientación económica que fije el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda.

Sr. Secretario de Hacienda. — Tengo la impresión de que en el texto del artículo que tiene el señor diputado debe haberse deslizado un error, pues entiendo que se refiere al inciso h) del artículo 16, y no al artículo 16.

Sr. Mercado. — En efecto, señor secretario.

Sr. Secretario de Hacienda. — Está aclarado, entonces.

Sr. Mercado. — Me rectifico en ese aspecto. Queda, entonces, reducida mi observación a los distintos incisos que se han mencionado, incluso el que acaba de citar el señor secretario de Hacienda.

Sr. Secretario de Hacienda. — Los incisos que por este artículo se derogan son los que confieren exclusivamente a las autoridades del banco facultades para aprobar sus respectivos presupuestos. Este régimen fue modificado en el año 1957 por las reformas bancarias, y se substraigo a la aprobación del Honorable Congreso la fijación de los presupuestos anuales de dichas instituciones. Por eso el actual Poder Ejecutivo ha creído conveniente continuar con la norma de que el Honorable Congreso apruebe los presupuestos de esas entidades.

Sr. Mercado. — Muchas gracias, señor secretario.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 10 del proyecto de ley.

— Resulta afirmativa de 95 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 11.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Mercado. — Para su mejor comprensión, voy a leer este artículo. Dice así: «Substitúyese el texto del artículo 33 de la ley 11.672 (complementaria permanente del presupuesto, edición 1943), modificado por el decreto ley 5.169/58, por el siguiente: "Artículo 33. — Para la atención de los gastos que por disposición legal deben cubrirse con el producido de la negociación de empréstitos, el Poder Ejecutivo emitirá anual-

mente, con mención de las leyes que faculden su emisión, la cantidad necesaria de títulos de deuda pública interna o externa, que serán amortizados mediante sorteo a la par, cuando la cotización sea a la par o sobre la par, y licitación o compra cuando la cotización sea abajo de la par, pudiendo realizar asimismo las operaciones de financiación transitoria que resulten necesarias, inclusive con el Banco Central de la República Argentina y demás instituciones bancarias oficiales, mediante la utilización por parte de éstas de fondos que obtengan de préstamos o colocaciones provenientes del exterior. A esos efectos, facúltase a dichas instituciones bancarias para celebrar con el gobierno nacional los convenios respectivos en forma independiente y al margen de las otras operaciones de crédito que puedan realizar con dicho gobierno, de acuerdo con las autorizaciones y limitaciones contenidas en las cartas orgánicas correspondientes."»

Señor presidente: esta disposición nos preocupa profundamente, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual en lo que se refiere a las facultades de los bancos oficiales para acordar fondos al Poder Ejecutivo.

Sr. Liceaga. — ¿Puede informar, señor diputado, en qué artículo de la carta orgánica del Banco Central se autoriza a esa institución a hacer préstamos al gobierno?

Sr. Mercado. — Yo no soy muy memorista, pero todos sabemos que de acuerdo con las cartas orgánicas de los bancos del Estado, esas instituciones pueden anticipar fondos al erario público. Precisamente, se ha hecho público en estos días, por revistas especializadas en la materia, que ha sido colmado el límite de esa autorización, y que se han emitido cinco mil millones de pesos en bonos, cuya emisión no estaría justificada legalmente.

Sr. Liceaga. — Posiblemente, el señor diputado está sufriendo un gran equívoco. Ha hablado de la posibilidad de que el Banco Central, por autorización de su ley orgánica, pudiera realizar préstamos al Poder Ejecutivo. Aseguro al señor diputado que en el artículo 19 de la carta orgánica del Banco Central están especificadas las prohibiciones que rigen en el funcionamiento de esa institución, y entre ellas figura la de realizar préstamos al gobierno.

Quiere decir que el señor diputado, o ignora las disposiciones de nuestra legislación bancaria o está tergiversando la verdad.

Sr. Mercado. — Es público y notorio —el hombre de la calle, que no es un especialista ni un supercerebro en materia económica y financiera, lo sabe como usted— que el Estado emite títulos públicos y los coloca en las instituciones bancarias oficiales hasta un cierto límite de los fondos que poseen en sus arcas las instituciones bancarias. Eso es de toda la vida, no de ahora.

Aquí, precisamente, se quiere ir más allá de esos límites. Por eso se establece, en forma clara y terminante: «A esos efectos, facúltase a dichas instituciones bancarias para celebrar con el gobierno nacional los convenios respectivos, en forma independiente y al margen de las otras operaciones de crédito que puedan realizar con dicho gobierno.» Se habla de las operaciones «al margen de las otras operaciones de crédito». Quiere decir que se puede superar esos límites, que quizás en esta hora estén ya superados.

Por eso, nosotros vamos a votar en contra del artículo en consideración.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda.

Sr. Secretario de Hacienda. — El señor diputado considera que, con esta redacción, el Poder Ejecutivo pretende sobrepasar los límites de las autorizaciones vigentes por la ley orgánica del Banco Central.

Puedo asegurar al señor diputado y a esta Honorable Cámara que eso no surge, en absoluto, de esta redacción. El artículo dice bien claro que será para utilizar los fondos que las entidades bancarias obtengan de «colocaciones del exterior». Esto es completamente independiente del régimen actual existente por la carta orgánica del Banco Central; no implica, en absoluto, alterar esas disposiciones.

Sr. Mercado. — ¿Me permite el señor secretario?

Sr. Secretario de Hacienda. — Sí, señor diputado.

Sr. Mercado. — La responsabilidad de las instituciones bancarias está en juego, provengan los fondos del interior o del exterior. De manera que no interesa la fuente de tales fondos. El hecho concreto es que se supera el límite legal pertinente.

Sr. Secretario de Hacienda. — Estimo oportuno formular aquí una aclaración de orden fundamental. Todos los gobiernos recurren al sistema de colocación de títulos para obtener dineros destinados a realizar sus planes cuando éstos están destinados a la reactivación económica del país. No vamos a ocultar esto que, por otra parte, no es un misterio para nadie. Todos los países recurren a la colocación de papeles o títulos de empréstitos con esa finalidad.

De modo que no debemos sorprendernos por el hecho de que se recurra a un procedimiento de esa índole para obtener los medios financieros que en este caso necesitamos.

Sr. Recio. — Como norma de excepción.

Sr. Secretario de Hacienda. — No, señor diputado. Ningún plan de reactivación económica puede realizarse sin recurrir al préstamo. Y el préstamo, ya sea interno o externo, toma la forma del empréstito.

Hay que diferenciar cuando esos títulos se colocan exclusivamente en un proceso inflacionista para atender gastos ordinarios o de con-

sumo de la administración pública. Y no es ese el sentido de este artículo. Por ello, quería recalcar al señor diputado que esto no implica en absoluto alterar las normas vigentes en el Banco Central en lo que atañe a la colocación de papeles por el Estado. Esta es una nueva fuente de recursos que puede obtener el banco por vía de préstamos del exterior.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 11 del despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa de 87 votos; votan 95 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Precc. — Voy a proponer dos artículos nuevos que se incorporarían al despacho de la comisión.

El primero de ellos tiene por objeto resolver el problema de la cancelación del quebranto de la Caja Nacional de Ahorro Postal.

Desde el año 1946, en que la Caja Nacional de Ahorro Postal fue incorporado al sistema bancario oficial, y hasta el 30 de noviembre de 1957, el Banco Central no sólo se hacía cargo del costo financiero de las sumas depositadas a su orden en los organismos competentes del sistema, sino que cubría además los gastos administrativos que tal gestión irrogaba. En el caso de la caja, ésta obtenía a su vez en sus servicios bancarios recursos provenientes de la diferencia entre el rendimiento de sus inversiones (fondos públicos del 3 por ciento, y préstamos personales al empleado público, al 8 por ciento) y el costo financiero de los adelantos proporcionados por el Banco Central de la República Argentina a tasas del 2, 4 y 3 por ciento, respectivamente, según fuese para la compra de títulos o para su inversión en préstamos. En cuanto a los servicios de seguros, éstos se han autofinanciado, y así continuán, conforme con su naturaleza específica.

A partir del 1º de diciembre de 1957, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del decreto ley 13.127/57, y como consecuencia de las medidas de ordenamiento bancario según lo dispuesto por el decreto ley 13.125/57, el Banco Central autorizó el tipo máximo de interés del 5 por ciento para los depósitos de ahorro.

Los bancos privados adoptaron de inmediato esa tasa máxima e hicieron una amplia publicidad tendiente a aumentar sus carteras. La caja, que demoró por algunos días la resolución al respecto, ya que se deseaba solucionar antes el problema económico financiero que le originaba el nuevo régimen bancario, comenzó a registrar en los primeros días de diciembre una merma pronunciada en sus depósitos. Por ello, el 10 de diciembre se vio forzada a establecer el mismo tipo de interés del 5 por ciento que los demás bancos, puesto que habría sido una grave responsabilidad demorar más tiempo esa

medida, ante la evidente situación de inferioridad en que la colocaba una disposición del Poder Ejecutivo, máxime siendo la institución la entidad genuinamente señalada para propulsar y coleccionar el ahorro de las clases más numerosas de la población, conforme con los fines que le indica su ley orgánica.

La circunstancia, pues, de que la caja se vea confrontada con la necesidad de abonar mayores intereses a los ahorristas y, a su vez, atender por sí los gastos que le irrogan sus servicios específicos, motivó y motiva un quebranto para la institución, que precisamente persigue cubrir el artículo proyectado. Esto no impide aclarar que la solución es transitoria, pues el problema tendrá que ser definitivamente sorteado mediante la entrega a la Caja Nacional de Ahorro Postal de valores públicos que reditúen lo necesario para cubrir adecuadamente sus gastos operativos, o por la vía de que dicha caja coloque sus disponibilidades en operaciones cuyo rendimiento compense las erogaciones de su explotación específica.

Por estas razones, propongo que se agregue al despacho en consideración un artículo nuevo cuyo texto ya hice llegar a la Secretaría y del que pido se dé lectura.

Sr. Presidente (Monjardín). — Por Secretaría se va a dar lectura del artículo nuevo propuesto por el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Secretario (Oliver). — Como artículo 12 del proyecto iría el siguiente texto:

Facúltase al Poder Ejecutivo para tomar a su cargo el quebranto producido hasta el 31 de diciembre de 1958 en la gestión de la Caja Nacional de Ahorro Postal, como consecuencia de las medidas de ordenamiento bancario dispuestas por el decreto ley 13.125/57, a cuyo efecto realizará las operaciones de crédito que correspondan.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Armendáriz. — Nuestro bloque votará favorablemente el artículo propuesto por el señor diputado Prece, pero aspira a que sea la última de las facultades en blanco que se otorga al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo nuevo propuesto como artículo 12 por el señor diputado por Santa Fe, en nombre de la comisión.

— Resulta afirmativa de 86 votos; votan 95 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Prece. — Todos sabemos que el erario público se encuentra en serias dificultades financieras.

Por otra parte, está puesta a prueba la discreción, la austeridad y la limitación de este gobierno para llenar las vacantes que se han ido produciendo en la administración pública,

sin que pueda ponerse en duda que desde su instalación el día 19 de mayo último, el actual gobierno ha respetado la estabilidad de los empleados públicos.

Cuando nos hicimos cargo del gobierno encontramos que la administración estaba abarrotada de empleados y la opinión pública sabe que el exceso de ellos conspira contra el equilibrio del presupuesto, porque un alto porcentaje de la renta nacional debe ser destinado al pago de sueldos. No obstante eso, nuestro gobierno respetó todos los nombramientos efectuados con anterioridad e hizo muy pocas designaciones en relación con las que generalmente se hacen cuando asumen sus cargos nuevas autoridades.

Pero ahora hemos iniciado una política de austeridad, una política de economías que tiene por finalidad lograr el equilibrio del presupuesto. Y es ante esta situación que el gobierno nacional debe pensar, también, en crear para el empleado público un sistema de incentivación en favor de quien sea reclamado para prestar tareas en el sector privado. Este sistema de incentivación ha de ser como una indemnización para el empleado que desea irse a cumplir ocupaciones en esferas de la actividad privada.

De esta manera, al iniciarse una nueva etapa en el trabajo nacional, al iniciarse una nueva era política de trabajo nacional, se reclamará el concurso de hombres capaces que puedan contribuir al desarrollo del país, de modo que los empresarios han de buscar en todos los sectores personas capaces y valores eficientes para contribuir al progreso del país. En esa nueva etapa del desarrollo nacional, todos los hombres y mujeres que deseen trabajar han de encontrar la posibilidad de hacerlo.

Como en este momento el funcionario que se aleja de la administración no está amparado por ningún régimen de indemnización, el proyecto que deseo presentar tiende a instaurarlo para que, a la manera de lo que ocurre en los sectores de la actividad privada, tengan el respaldo de un ingreso que se ha de otorgar en forma mensual, del modo que reglamentará el Poder Ejecutivo. De esta manera, por un lapso más o menos largo, el funcionario se ha de sentir protegido por la administración pública, hasta tanto pueda resolver el problema de su ubicación.

No debe interpretarse esta disposición en el sentido de que se deseen provocar cesantías en la administración y, menos aún, cesantías en masa. Por el contrario, debemos llegar a un ordenamiento, que lo venimos a establecer a través del estatuto aprobado por decreto del Poder Ejecutivo, y con respecto al cual, en la sesión de esta tarde, hemos dado los créditos necesarios para que sea una realidad.

Lo que el Poder Ejecutivo necesita es la posibilidad de respaldar al funcionario que se aleja de la administración y también a aquellos que, por tener que someterse a concursos que

establece el estatuto, no se encuentren satisfechos con las calificaciones de las juntas respectivas. De esta manera, resultarán económicamente protegidos.

Estas son las razones que abonan la presentación de este artículo, cuya lectura solicito del señor presidente se dé cuenta por Secretaría.

Sr. Presidente (Monjardín). — Por Secretaría se va a dar lectura del artículo propuesto.

Sr. Secretario (Oliver). — El texto del artículo propuesto, que iría como número 13, es el siguiente:

Autorízase al Poder Ejecutivo para que, frente a la ineludible necesidad de realizar economías en los gastos públicos, proceda mediante la aplicación de un régimen de indemnizaciones para los agentes, a reducir el plantel del personal de la administración pública nacional en la medida que estime compatible con el adecuado funcionamiento de los servicios. Dicha indemnización deberá ser graduada de acuerdo con la antigüedad de los agentes y abonada en cuotas mensuales.

Las vacantes obtenidas serán eliminadas automáticamente del presupuesto y el importe de las mismas se destinará al pago de las indemnizaciones mediante la incorporación del respectivo crédito específico en dicho presupuesto. Las normas del presente artículo tendrán aplicación hasta el 31 de octubre de 1960, quedando transitoriamente en suspenso cualquier disposición legal que se le oponga.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Belnicoff. — Señor presidente: el proyecto que acaba de leerse constituye realmente una novedad para esta bancada, no en cuanto al principio de la indemnización a los empleados públicos despedidos, porque ese principio fue sostenido por nuestra bancada en proyectos que ya deben estar en los archivos de la Honorable Cámara. Lo que sí nos sorprende es la fundamentación que acaba de hacer el señor diputado por Santa Fe. En buen romance el señor presidente de la Comisión de Presupuesto anuncia que se van a producir centenares o millares de cesantías en la administración pública y que la indemnización que se va a abonar a los empleados nacionales despedidos será pagada en cuotas mensuales, no estableciéndose a qué régimen se va a ajustar dicho pago.

En realidad, se trata de una autorización en blanco que se entrega al Poder Ejecutivo, porque en cuanto a la premisa que acaba de formular el señor diputado Prece, diciendo que las partidas correspondientes a esas cesantías serán anuladas y que este nuevo artículo tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 1960, ya sabemos bien cómo se manejan estas cosas cuando se hace política. Estamos por creer que de lo que se trata es de reemplazar una gran masa de empleados públicos por otra gran masa de funcionarios, de acuerdo con las directivas del Poder Ejecutivo.

Sr. González. — Eso lo haría la bancada del señor diputado si fuera gobierno.

Sr. Belnicoff. — Para ilustrar al señor diputado González, le voy a informar lo siguiente: que en algunas reparticiones donde se han congelado las vacantes, se han nombrado asesores en el mismo número de vacantes producidas.

Es posible, señor presidente, que ése sea también el criterio que se siga más adelante para la satisfacción de las aspiraciones de los correccionarios del señor diputado.

Esta bancada se va a oponer terminantemente a este proyecto que acaba de enunciar el señor diputado Prece. Y para que la opinión pública sepa también cómo se ha diligenciado este asunto en la Cámara de Diputados, va a solicitar que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda.

Sr. Bauducco. — El señor diputado reconoce, a través de sus expresiones, que hay funcionarios públicos que están obstruyendo la tarea de gobierno.

Sr. Belnicoff. — Yo no reconozco que haya funcionarios públicos...

Sr. Presidente (Monjardín). — Señores diputados: la Presidencia otorgó la palabra al señor secretario de Hacienda.

Sr. Secretario de Hacienda. — Señor presidente...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monjardín). — Señores diputados: tengan la bondad de dejar hablar al señor secretario de Hacienda, a quien la Presidencia ha concedido la palabra.

Sr. Secretario de Hacienda. — Los señores diputados, a través de sus manifestaciones, ponen en duda el carácter de la gestión del gobierno de la Nación. Como representante del mismo, rechazo esas manifestaciones terminantemente. No hay, ni ha habido nunca, por parte del Poder Ejecutivo, propósito de realizar cesantías en masa. La prueba la da el hecho de que en siete meses de gestión no ha provocado ni forzado la cesantía de nadie. Probablemente —y ratifico algunas de las manifestaciones que hizo el señor diputado de la mayoría— éste es el gobierno que al subir el 1º de mayo al poder, teniendo en cuenta su carácter político, hizo la menor cantidad de designaciones.

Sr. Pozzio. — Todo es cuestión de empezar. Ahora van a empezar.

Sr. Secretario de Hacienda. — No, señor diputado.

Sr. Pozzio. — Este era un ensayito.

Sr. Secretario de Hacienda. — Saben muy bien los señores diputados que no es así. Yo les rogaría que en vez de hacer caso o de regirse exclusivamente por ciertos y determinados avisos y publicaciones, concurrieran a las oficinas

públicas. En este momento les hago el ofrecimiento que tuve ya oportunidad de hacer a uno de los señores diputados de la minoría: tendré las puertas de la secretaría a mi cargo siempre abiertas, para que los señores diputados se informen en todo momento de la gestión de gobierno en lo que a mi secretaría respecta. Demostraré que el número de cargos que ahora hay, es inferior al que existía en el momento de iniciar sus funciones el actual gobierno nacional, a pesar de lo cual el señor diputado de la minoría pretende señalar una inexistente política de nombramientos.

Las preocupaciones que parecen inquietar al señor diputado por la presentación de este artículo por el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, son completamente infundadas. Lo demuestra la gestión de este gobierno desde el 19 de mayo. Nadie puede decir que se han producido cesantías; y el gobierno no tiene por qué cambiar de opinión, ni de gestión.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. González. — Señor presidente: el anuncio de este proyecto, presentado por el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que interpreta el pensamiento del bloque y del gobierno, está fundado esencialmente en la decisión, que yo tantas veces anunciara en este recinto, de asumir intrépidamente la responsabilidad de gobernar el país con prescindencia de los factores circunstanciales que movieron siempre la conducción de gobiernos inspirados en razones meramente políticas.

Se ha dicho bien cuando se afirmó que, por primera vez en la historia del país, la asunción de un gobierno, que para decirlo con verdad, implicaba un cambio de orientación en la conducción política nacional, no significó —contra lo que temían millares de funcionarios— desplazamientos en masa para abrir el presupuesto en la creación de vacantes que posibilitaran la colocación de millares de hombres y mujeres adictos al partido gobernante. Nosotros podemos decir, sin ser desmentidos, que en estos ocho meses transcurridos hemos probado que, por encima de la pequeña política de los nombramientos, nosotros, que confiamos en la puja de los ideales y de las grandes realizaciones nacionales, hemos dejado de lado el recurso remanido de los viejos caudillos de la política argentina, que se movieron así porque entendían que ésa era la tarea de su hora, y porque no advertían, como nosotros, que en definitiva el país se mueve no en función de los pequeños favores personales, sino en aras de los grandes ideales, que se traducen en la grandeza nacional.

Pero hay una realidad que tenemos que decir en alta voz. La situación económica del país es lamentable; su economía está arruinada; su ca-

pacidad financiera, conocida en este país y en el mundo, está verdaderamente lesionada. Un crecimiento inusitado de la burocracia, que se acentuó en el período que va desde 1935 hasta el 19 de mayo de 1958, afectó el desarrollo del país en los últimos años. Mientras por un lado hubo dispendio y crecimiento en los gastos, se produjo por el otro un decrecimiento de la producción nacional. El despilfarro llevó a gastar una riqueza inexistente, en la creencia ingenua y fácil de que podíamos vivir para siempre o por largo tiempo sin realizar el esfuerzo que demanda un destino y el logro de un porvenir.

Todo esto nos fue dado sin que lo buscáramos. Nosotros asumimos a conciencia la responsabilidad de restaurar la economía nacional. Examinamos el panorama que se nos ofrece y advertimos la dramática situación; comprendemos que el país está gastando mucho más de lo que puede; que éste es un país que se orienta por el camino del gasto y del consumo y que dio las espaldas al camino de la producción.

Yo puedo decirlo con propiedad, porque desde la primera hora en que ocupé una banca en este recinto dije mi palabra clara al servicio de la antidemagogia. Fue la vieja política la que condujo al país por estos senderos, y ahora tenemos que reexaminarla para recorrerla en sentido inverso.

Yo sé que no está en la voluntad de los hombres de este gobierno, que tienen vocación popular y que están nutridos en un movimiento político que se construyó con las esperanzas y los sueños de los hombres del con ún, aplicar una política enérgica, implacable, que signifique llevar el hambre, la desolación y la miseria a los hogares populares; pero afirmo también que en la eventualidad de la elección irrenunciable entre los sentimientos materiales y los que dicta nuestro corazón y nacen de nuestra vocación popular y democrática, nosotros, en cumplimiento de una responsabilidad histórica, apretándonos el corazón, elegiremos otra vez el camino que conduce a la posibilidad de la realización que anhelamos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Esto no implica, de ninguna manera, lanzarnos a una política de cesantías en masa y a millares, pero sí implica la voluntad, que yo proclamo, de reducir al mínimo posible los gastos públicos, porque de otra manera no hay solución. El país entero sabe que el déficit del presupuesto nacional es del orden de los 40.000 millones de pesos, y el país entero sabe también que las cargas impositivas que ha votado esta Cámara y que han producido alarma en muchos sectores, apenas significarán un incremento de poco más de cuatro mil millones de pesos. De manera que aun agudizando la presión impositiva, estaríamos en un déficit millonario, que escapa a toda posibilidad de ser cubierto, como no se elija el camino duro, el

camino que no quisieron emprender los hombres que gobernaron a la República en la irresponsabilidad y en la inconducta, y que después no quisieron ver los hombres que, en nombre de la democracia, afirmaron que venían a poner orden en la República, pero carecían de intrepidez para hacerlo.

Asumiremos la responsabilidad histórica, que es la mejor manera de servir al país, prescindiendo de las consideraciones meramente políticas, y advertidos de que el pueblo tendrá la inteligencia de comprender, y que tendrá la sabiduría popular para advertir que no es posible que un equipo de hombres de esta categoría moral y de esta vocación popular pueda elegir porque sí, sin necesidad, porque lo dicte un capricho o una voluntad omnímoda, el camino duro que nos marcamos, y en el cual somos los primeros sacrificados.

Tenemos la decisión de corregir este panorama económico y financiero, tenemos la voluntad de estabilizar el valor del signo monetario, que está envilecido, de reducir los egresos del presupuesto nacional, de realizar la obra de consolidación, tanto en el campo inmediato del desarrollo económico, como en el campo mediano, poniendo en marcha las grandes soluciones de fondo, para resolver los problemas energéticos a través de la explotación carbonífera y petrolífera, y promover el desarrollo industrial mediante el reequipamiento, para lograr el aumento en forma importante de la producción que es en definitiva la cuestión fundamental de la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

El equilibrio se logrará sólo por el sacrificio y la austeridad. Apelo a la responsabilidad y el patriotismo de los señores diputados de la minoría, que saben, como nosotros, que el país está enfermo de burocracia, de vida fácil, de halagos, de política demagógica irresponsable, que fue adormeciendo el sentimiento de patria y la vocación realizadora en los hombres de todos los sectores nacionales.

Digo con lealtad que la imputación que formuló nos comprende a todos nosotros y a todos los sectores de la República, tanto a los del privilegio como a los más humildes, a los sectores del trabajo y a los empresarios. El país ha vivido largos años en el ensueño de la riqueza fácil, que viene por los caminos turbios de la inflación, que un día termina en el violento llamado a la realidad. Con capacidad realizadora y con espíritu de sacrificio para emprender la ruta nueva, la Unión Cívica Radical Intransigente habrá de llevar al pueblo hacia sus grandes destinos.

Con decisión patriótica, con firme voluntad al servicio del país, convencidos de que no hay otra solución para la República, convencidos de que sería intento vano pretender incrementar

los ingresos por la vía impositiva —porque está exhausta la capacidad de rendimiento fiscal del pueblo argentino, y que hay que ir a las cifras del presupuesto para ver en qué grado están por encima de lo indispensable, para advertir en qué medida hay que reducir los gastos, no sólo en el aspecto concreto del personal, sino en los gastos superfluos, que son muchos en la administración pública—, los diputados de la mayoría traen este artículo advertidos de la gravedad y de la desazón que provocará en grandes sectores.

No habrá cesantías en masa en la República. No se verán millares de empleados públicos desposeídos y en la calle. Se crea un procedimiento que implica abrir un crédito en tiempo para que el hombre que deba dejar su empleo por voluntad propia, si así lo decide frente a la convocatoria de otros establecimientos que se instalarán en plaza, o porque así lo resuelva la voluntad correctora de quien ejerce el poder, cuente con la indemnización correspondiente, en función de su antigüedad y sueldo, con la garantía que implica el estímulo de abandonar la burocracia para incorporarse a las filas de la producción y contribuir a corregir la deformación que todo el país conoce y que denuncia, pero que nadie hasta ahora ha tenido el coraje de encarar frontalmente, con la valentía necesaria para resolverlo.

Los radicales intransigentes, advertidos de nuestra responsabilidad, elegimos el camino sacrificado y duro en que nos encontramos, en la convicción de que es el único válido para resolver el problema económico de la República. Así podremos encauzar la producción e impulsar la riqueza nacional; así podremos afirmar la reconstrucción de la economía nacional, para lograr un día equilibrar los saldos de la balanza de pagos, para después lanzarnos a la conquista de las cosas que anhelamos, porque en política, cuando se carece de sutileza para captar la realidad, y cuando se pretende seguir viviendo en el campo dorado de los sueños, se están malogrando las soluciones de fondo, que a veces son impostergables.

Así pretendo definir el espíritu de esta bancada y de este gobierno. Lo decimos sin tapujos, para que lo sepa el país entero. En este instante están lejos de nuestras mentes las posibilidades secundarias de las vacantes para ganar puestos, porque no creemos en la política de los empleos y porque somos protagonistas de un extraordinario esfuerzo electoral que demostró que desde el llano y sin empleos se puede ganar un gobierno en comicios libres, cuando se representan las esperanzas populares.

Así emprendemos la tarea. El país comprenderá, el pueblo comprenderá; porque si así no lo hiciera, estaría jugando a la suerte de su

porvenir; y si así no lo entendiera, el gobierno cumpliría igual con su deber al servicio de los destinos auténticos de la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pozzio. — Estamos un poco curtidos ya de palabras y de afirmaciones que vienen de antigua data. Justamente, por circunstancias más o menos similares a las presentes. No olvidemos que allá por 1952 se habló por el régimen de puesto de un presupuesto de austeridad, y entre las cláusulas que contenía para hacerlo efectivo —que nunca se cumplió— estaba una similar a la que consideramos. La base de esa cláusula se refería a ese pesado engranaje de la burocracia, que había que reducir con las cesantías necesarias. Cesantías que no tenían ese sentido de austeridad o de reorganización de la administración pública, evidentemente pesada en nuestro país, sino que perseguían un fin político.

No vamos a inferir en esta circunstancia que este proyecto tienda a la misma cosa, pero dar un instrumento que pueda posibilitar esa situación es lo grave y difícil. Por eso debe aclararse con precisión para evitar la angustia a que hacía referencia el señor diputado González.

Por otro lado, la incentivación, que ha tenido un concepto determinado dentro de la producción y de la organización de los bienes, ahora tiene una acepción política, y se aplica también a la administración pública. La incentivación va a ser el nuevo nombre que han de tener las cesantías en masa en la administración pública.

Pese a las manifestaciones del señor diputado González y del señor secretario, lo cierto y real es que no se trae aquí ninguna frase, ningún documento, ni ninguna expresión que avale la posición adoptada en la emergencia. Nosotros tenemos el derecho de pensar, por lo menos, que este agregado no fue discutido en el seno de la comisión; pero evidentemente cuenta con la anuencia del Poder Ejecutivo, y no será ajeno a su establecimiento en la ley.

Si el Poder Ejecutivo nos hubiera suministrado los datos acerca del número de agentes de la administración pública, del que deberá dejarse cesante para ir a esa austeridad, hubiera podido conformar nuestra inquietud.

Nada de eso ha ocurrido; ni siquiera se dice cuál va a ser el número de cesantías ni la forma en que se aplicarán. Será una autorización hasta el mes de octubre de 1960 para que el Poder Ejecutivo realice con discreción total el ejercicio de esas facultades. Nosotros creemos que resulta harto peligroso, dado que se presta al juego de la persecución política, que corresponde eliminar definitivamente del país. No dejamos de reconocer que todos los gobiernos han padecido de estos vicios de la burocracia,

y que actualmente se ha ido acrecentando, pero evidentemente estimo que estos momentos de angustia económica no son adecuados para poner en práctica esas disposiciones. Existen otros modos y otros rubros donde se pueden realizar economías para poder demostrar la austeridad republicana que tanto se proclama y no se practica.

No hace muchos días hemos tenido una prueba evidente de ello en ciertos sectores de la población, donde pudo haberse demostrado sentido de la austeridad, sin perseguir ventajas de tipo personal. Si ciertas manifestaciones y ostentaciones se hubieran dejado de lado se habría dado prueba de austeridad, la que debe practicarse con hechos concretos y no con declamaciones.

Es necesario disponer de datos y estadísticas; resulta indispensable conocer la forma en que las cesantías se irán produciendo, a fin de llevar seguridad y tranquilidad al país. Mientras tanto tenemos derecho a seguir dudando y a considerar que esta disposición será un instrumento más de persecución política. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Belnicoff. — Señor presidente: el señor secretario de Hacienda, en la réplica a las palabras que yo pronunciara, estuvo acertado en la primera parte de su exposición y desacertado en la segunda. Estuvo acertado en cuanto defendió al Poder Ejecutivo: si no hubiera hecho en este recinto la defensa de los actos del poder del cual depende, debería renunciar. Estuvo desacertado en cuanto aconsejó que yo no debí recurrir a ciertos informes o noticias publicados en los diarios o en algunas otras expresiones de la opinión pública.

Yo, señor presidente, no reconozco al señor secretario de Hacienda ninguna autoridad para aconsejarme lectura alguna.

Sr. Secretario de Hacienda. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Belnicoff. — Sí, señor secretario.

Sr. Secretario de Hacienda. — Señor presidente: cuando hice las manifestaciones a que se refiere el señor diputado quise significar que no hay que considerar las cosas en forma parcial, sino que hay que observar la gestión del gobierno en conjunto. En los periódicos se publica un nombramiento y no se mencionan las diez renuncias que lo han precedido.

Además, quise significar que hay muchos más datos relacionados con este aspecto de la cuestión que se está considerando. Si los señores diputados concurren a las oficinas de gobierno podrán interiorizarse personalmente de esos datos. Por eso le hice el ofrecimiento de que mi secretaría tenía las puertas abiertas para cualquier ciudadano y, con más razón, para cualquier diputado, a fin de verificarlos y cercio-

rarse respecto de estas cuestiones en forma integral y no parcial. Ese fue el propósito de mis manifestaciones.

Sr. Presidente (Monjardín). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Belnicoff. — El señor secretario ahonda aún más el abismo en que se debate, porque la información que debió haber dado a la Honorable Cámara respecto del proyecto que estamos considerando, hasta este momento no la ha proporcionado.

Sr. Secretario de Hacienda. — No sabía que se iba a incluir ese artículo.

Sr. Belnicoff. — El señor diputado González acaba de manifestar que el Poder Ejecutivo estaba en conocimiento del mismo.

Sr. Secretario de Hacienda. — ¿Qué información necesita el señor diputado por la Capital?

Sr. Belnicoff. — Ninguna. He seguido las palabras del señor diputado González —que generalmente es un hombre bien informado—, y digo al señor secretario de Hacienda que no puede ignorar en este momento la presentación del artículo que acaba de proponer el señor diputado Prece.

¿Cómo lo conoce el Poder Ejecutivo si el señor secretario lo ignora?

Sr. Secretario de Hacienda. — Es un proyecto de la comisión.

Sr. González. — El señor diputado Belnicoff quiere derivar la cuestión...

Sr. Belnicoff. — No le puedo permitir...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. González. — El país está cansado de gestos de esa clase. El país reclama seriedad.

Sr. Belnicoff. — Pero no la encuentra. El señor secretario ha dicho que no conoce el proyecto, y el señor diputado ha dicho que el Poder Ejecutivo conoce ese proyecto.

Sr. González. — Supongo que sí.

Sr. Belnicoff. — Pero el señor secretario ha dicho que no.

Sr. González. — No ha dicho que no.

Sr. Belnicoff. — Acaba de decir que no.

Sr. González. — Además, al país le importa...

Sr. Belnicoff. — Al país le importa que no se presenten proyectos sorpresivos.

—Hablan a la vez varios señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — Ruego a los señores diputados que cuando el presidente habla tengan la cortesía de escucharlo. No quiero decir más, ni debo decir menos.

Ruego también a los señores diputados que tengan la bondad de dirigirse a la Presidencia y evitar los diálogos.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Belnicoff. — Como bien lo ha dicho el señor diputado Pozzio, no tenemos la información necesaria que nos permita valorar el proyecto que está en discusión. No solamente no tenemos la información necesaria, sino que no se ha tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es el organismo que debió haberlo considerado.

No es posible que por este procedimiento se pretenda arrancar el voto de la minoría en favor de algunas iniciativas. Nosotros podemos estar acertados o equivocados en nuestras actitudes, pero para fundar cualquiera de ellas necesitamos estar bien informados. No se nos ha proporcionado ninguna noticia a este respecto.

Eso es lo que nosotros censuramos severamente en este momento en la Cámara de Diputados de la Nación. No puede admitirse que a las 23 de un día de tan larga sesión se nos haga conocer una iniciativa de tan alta envergadura, que va a ir hasta los cimientos mismos de la burocracia argentina, sin que antes se haya discutido y se nos hayan proporcionado los datos respectivos que nosotros solicitamos.

Además, he seguido con toda atención el discurso del señor diputado González y la intrepidez de que hace gala, por propia confesión, con respecto a la naturaleza de las actitudes que un gobierno debe tomar cuando se encuentra ante situaciones tan graves como las que tiene que afrontar el actual gobierno de la Nación. Ya conocemos, por bien sabido, cuál es el estado de la economía, de las finanzas y del país; lo conocen todos y cada uno de los señores diputados, y hasta me atrevería a decir que también lo conoce el hombre común del pueblo por la amplia difusión que se ha venido dando en estos últimos tiempos al estado económico-financiero de la Nación.

Pero si nosotros protestamos en este momento, lo hacemos con toda razón, porque casi por vía de contrabando se pretende tratar aquí, esta noche, un proyecto sobre cuya base no estamos informados en manera alguna. Por lo tanto votaremos en contra.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Prece. — Creo que el sector de la minoría no ha comprendido el espíritu de este proyecto. Entiendo que no hay ninguna duda en este sector y en el de la minoría de que es excesivo el número de empleados que ocupan cargos en la administración nacional. Es evidente que un gobierno de sensibilidad popular como el nuestro en ningún momento va a presentar un proyecto para crear un problema de tipo social como la desocupación. Pero es también evidente que las soluciones de las democracias deben ser concretas.

Hemos pensado cuál sería el camino para resolver de alguna manera el peso que los servidores del Estado significan para el presupuesto

nacional. Es evidente que el avance de las leyes sociales y de todas las disposiciones en materia de previsión que tienden a lograr un equilibrio de los salarios con el costo de la vida va creando día a día una carga insostenible para el presupuesto nacional.

Desde luego que los empleados públicos no son responsables de esa situación. Ellos trabajan honradamente y con toda voluntad al servicio del Estado, poniendo seguramente lo mejor de su capacidad, de su espíritu y de sus sentimientos de argentinos al servicio de la Nación. Pero un gobierno responsable como el nuestro ha de encontrar un camino que lleve a la solución del problema. Ese camino consiste precisamente en ir logrando en forma paulatina la traslación, si es posible de manera voluntaria, de empleados públicos a la actividad privada.

Sr. Pozzio. — Si fuera voluntaria, sería una cosa muy distinta. El señor diputado ha hablado de cesantías.

Sr. Silveira Márquez. — Si me permite el señor diputado...

Quiero señalar con todo el respeto que tengo por los señores diputados, y especialmente por el señor diputado por Santa Fe, la contradicción que existe entre su primera exposición y la que en forma realista ha hecho el señor diputado González. He seguido con mucha atención la primera exposición del señor diputado, y consultando con algunos colegas, llegamos a la conclusión de que era harto interesante el planteo que estaba haciendo, porque el señor diputado por Santa Fe decía que la administración pública iba a ser evacuada en parte y absorbida por la actividad privada, y que en vista de ello —creo haberlo entendido así—, el Estado indemnizaría a los agentes.

Pero frente a esa primera exposición, el señor diputado González afirmó que había que afrontar con intrepidez y coraje una nivelación del presupuesto, y por eso es que se apelaría a una indemnización. Eso es lo que trae en nosotros una duda.

Sr. González. — No son excluyentes los términos.

Sr. Silveira Márquez. — Al principio parecía que la administración pública sería privada, contra su voluntad, de cierto número de agentes, y ahora nos enteramos de que la administración pública quiere elegir a los agentes, y, lógicamente indemnizarlos.

Sr. Rodríguez Araya. — ¿En qué forma habrían de realizarse esas cesantías? ¿Por razones de antigüedad? Quiere decir que se echará a los nombrados por la Revolución Libertadora.

Sr. López (J. R.). — El señor diputado sabe que este gobierno no ha echado a ningún empleado u obrero nombrado por la Revolución Libertadora. No tiene derecho a hacer una aseveración de esa naturaleza.

Sr. Presidente (Monjardín). — La Presidencia ruega a los señores diputados se sirvan no dialogar.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Prece. — Este proyecto está avalado por los representantes de nuestro sector, de larga lucha al servicio de las causas populares, y avalado también por la gestión de un gobierno que con toda responsabilidad y celo ha cuidado las conquistas sociales. Puedo asegurar que ningún gobierno hasta el presente ha avanzado tanto en este terreno como el gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente, a pesar de los pocos meses que lleva en su gestión.

Cuando se tienen esos respaldos morales y cuando se trae un proyecto de esta naturaleza, con toda responsabilidad, asumiendo el papel de defensor de los intereses nacionales —como es el gobierno que rige el país en este momento—, no venimos a traer escondido, de contrabando, un artículo, sino que se trata de una disposición que traza una norma genérica, que tendrá que ser muy bien reglamentada.

Quiere decir que la reglamentación tendrá quizá mayor importancia que el artículo, que sólo da, como digo, una norma de carácter general.

Así se hará posible la traslación paulatina, y sin presiones del Poder Ejecutivo, de sectores de agentes de la administración pública. Con seguridad que ellos comprenderán que con esa solución han de redundar mayores beneficios para el país y aun para sus propios intereses pecuniarios, pues han de ser más útiles en algunos sectores de la actividad privada.

No hay otro camino para resolver el problema de la burocracia en el país que la congelación de las vacantes —que ya hemos dispuesto y está en práctica— y amparar al agente servidor del Estado que deba pasar al sector privado, acudiendo a un sistema de indemnización que lo proteja hasta que resuelva el problema de su nueva ocupación.

Sr. Belnicoff. — Deseo preguntar al señor diputado cuál ha de ser el régimen de indemnización que se adoptará.

Sr. Prece. — Ya dije que para mí tiene mucha importancia la reglamentación de este artículo, porque allí se darán las bases. El sentido del artículo es, precisamente, amparar al servidor del Estado con motivo de la traslación.

Sr. Belnicoff. — Estamos de acuerdo con el principio de la indemnización, ya establecido en proyectos presentados por este sector en otras Legislaturas. Pero lo que queremos saber es qué vinculación tiene este régimen de indemnización con la estabilidad del empleado público, y cuál será el régimen de la indemnización. Los diputados tenemos que saberlo.

Sr. Bauducco. — ¿Ante qué Legislaturas, señor diputado?

Sr. Belnicoff. — En esta Cámara se presentó un proyecto, con la firma del ex diputado Fe-

rrer Zanchi, por el que se otorgaba indemnización a empleados cesantes de la administración pública.

Sr. Prece. — Nadie puede interpretar que en este artículo hay móviles ocultos. Los agentes de la administración pública pueden tener la más absoluta tranquilidad de que este artículo no es para provocar cesantías en masa, sino que tiende a crear la norma para dar la facilidad de hacer la traslación.

Sr. Pozzio. — Pero está en la facultad del Poder Ejecutivo declarar las cesantías, si no he escuchado mal. Ese es el sentido del artículo que se propone.

Sr. Prece. — Nada ha impedido que este gobierno pudiera hacer las designaciones para cargos públicos tanto cuanto creyese que fuera conveniente o necesario para la mejor marcha de la administración. Sin embargo, el gobierno no ha hecho uso de esa franquicia y ha tenido en cuenta los intereses nacionales antes que los intereses políticos.

Este artículo tiene, evidentemente, una intención distinta de la que señalan los señores diputados de la minoría. Tiende a crear una norma que permita resolver de alguna manera el problema de la burocracia, estableciendo un beneficio de tipo social, que es la indemnización por despido. La indemnización ha de servir para que en la práctica sea una realidad la disminución de la burocracia.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Perette. — Antes de iniciar su exposición el señor diputado, ¿me permite hacer uso de la palabra brevemente?

Sr. Bogliano. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — El artículo que propone el sector de la mayoría es de una extraordinaria gravedad por la serie de consecuencias sumamente peligrosas que puede acarrear para el personal civil de la administración. Tal como está redactado, implica conferir una atribución discrecional que somete a todos y cada uno de los servidores del Estado a caer dentro de un pretendido reajuste burocrático.

Una medida de esta naturaleza no puede tramitarse en la forma sorpresiva en que se ha promovido. Ante todo, afecta uno de los atributos básicos del estatuto orgánico del personal civil de la Nación.

Somos partidarios de todo cuanto tienda a eliminar el gasto burocrático inútil, para alcanzar la austeridad en los gastos públicos. Pero también creemos que cualquier legislación de esta índole, impuesta por la necesidad, deberá merecer el debate, la controversia pública, el análisis a fondo de sus causas y efectos. La iniciativa que se trae a la Honorable Cámara es discrecional, porque deja en suspenso y anula la

garantía de la estabilidad del empleado público, consagrada en el artículo 14 nuevo de la Constitución.

Asimismo una medida de esta naturaleza es violatorio del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública, que asegura su estabilidad. No puede el Parlamento conferir una facultad discrecional e incierta de este tipo, en virtud de la cual el poder administrador podría suplantarse manu militari a servidores que se han ganado el derecho de seguir ocupando sus puestos.

No es del caso que se los suplante mediante el pago de una indemnización, porque el derecho a la estabilidad es mucho más fundamental.

Dada la situación actual de nuestra economía, sabemos que ésta fue una de las exigencias que dieron a conocer funcionarios vinculados al Fondo Monetario Internacional, con respecto a la reducción de los gastos públicos.

Sr. González. — Es una exigencia de la responsabilidad.

Sr. Perette. — Similar responsabilidad a la que usted invoca, señor diputado González, tenemos nosotros.

Sr. González. — Lo creo si el señor diputado propone una solución mejor, pero si se limita a hacer frases, no lo puedo creer.

Sr. Perette. — No necesito que el señor diputado califique mis palabras. Y quiero señalarle que la mayoría no puede pretender traer este «injerto clandestino», después de este largo debate, como si se estuviera encubriendo todo un proceso que implica poner una espada de Damocles sobre todo el personal civil de la administración pública. Si eso tiene que hacerse, debe estudiarse en forma detenida y con el análisis orgánico y profundo, y nunca con una presentación sorpresiva como se hace en este instante.

Sr. González. — Es cuestión de procedimiento.

Sr. Perette. — No es cuestión de procedimiento, señor diputado. Es oposición total al principio y al propósito enunciado.

Tenemos el deber de actuar con responsabilidad. Para ello debemos estudiar el asunto serenamente, incluso en todo lo vinculado a la legislación del presupuesto, que no se ha tratado.

Sr. González. — ¿Cree el señor diputado que hace falta algún estudio para saber que hay un millón de agentes en la administración pública y en las empresas del Estado? Lo sabe todo el país. ¿Hace falta algún estudio para saber que hay dificultades para el pago de los sueldos y que existe una gran demanda de mano de obra en los sectores privados?

Sr. Perette. — Sí, sabe todo el país que existe esa cantidad de empleados públicos. Pero en esta emergencia lo que no se puede permitir es que se haga un plan económico basado en cesantías y se plantee en forma clandestina y se pre-

tenda dar una sanción como la propuesta, sin ofrecer soluciones y sin procurar otros caminos para ellas. Toda norma sobre esta materia debe estar contenida en una legislación orgánica, y no mediante una autorización en blanco al Poder Ejecutivo, que pareciera tener la voracidad de disponer de todas las facultades de los poderes del Estado, pero sin afectar el principio de la estabilidad constitucional.

Esta cuestión se vincula con los anuncios de numerosas cesantías. Esto deberá tener el previo análisis integral y no a través de la improvisación que supone un «injerto clandestino».

Sr. Prece. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Perette. — Sí, señor diputado.

Sr. Prece. — ¿Conoce el señor diputado alguna cesantía dispuesta por el actual gobierno en sus meses de gestión?

Sr. Perette. — Lo que puedo asegurar al señor diputado es que se puso en ejecución un plan cumplido en muchas provincias del país, por el cual se suspendió la estabilidad de numerosos servidores públicos.

Sr. Prece. — ¿Se dispusieron cesantías?

Sr. Perette. — En muchas provincias se puso en comisión al personal de la administración. En uno de los primeros actos dados después del 1º de mayo se tomaron medidas en la Cámara de Senadores de la Nación contra viejos servidores del Estado, aniquilando el derecho a la estabilidad. En este momento no estoy en condiciones de decir con números a cuántos agentes se afectó. Señalo la actitud de la UCRI, que prometió estabilidad al país y ahora traerá el desasosiego a todos los empleados públicos de la Nación.

Sr. González. — Ahora se ha dado el estatuto.

Sr. Perette. — Yo creo que el estatuto debe existir para dar estabilidad a todo el personal civil de la administración pública.

Nos oponemos a este artículo y anticipamos que nuestro sector no contribuirá a formar quórum para la decisión discrecional que importa. Participará nuestro sector de todos los debates pero no ha de permitir con su presencia la sanción de esta norma. Deberá tener la mayoría número suficiente para dar por sí esta sanción.

De esta manera, y en la esperanza de una reflexión frente a este planteo, deja expuesta su posición el sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Pozzio. — Pido que se dé lectura del artículo propuesto, señor presidente.

Sr. Presidente (Monjardín). — Por Secretaría se va a dar lectura del nuevo artículo cuyo agregado ha propuesto el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Secretario (Oliver). — El texto propuesto es el siguiente:

Autorízase al Poder Ejecutivo para que, frente a la ineludible necesidad de realizar economías en los gastos públicos, proceda, mediante la aplicación de un régimen de indemnizaciones para los agentes, a reducir el plantel de personal de la administración pú-

blica nacional en la medida que estime compatible con el adecuado funcionamiento de los servicios. Dicha indemnización deberá ser graduada de acuerdo con la antigüedad de los agentes y abonada en cuotas mensuales. Las vacantes obtenidas serán eliminadas automáticamente de los presupuestos. El importe de las mismas se destinará al pago de las indemnizaciones, mediante la incorporación del respectivo crédito específico en dicho presupuesto. Las normas del presente artículo tendrán aplicación hasta el 31 de octubre de 1960, quedando transitoriamente en suspenso cualquier disposición legal que se le oponga.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández Ramírez. — Hace un instante solicité directamente a los señores diputados de la mayoría información con respecto a la congelación de las vacantes ya existentes en la administración nacional y las que posteriormente puedan producirse.

Sr. González. — ¿El señor diputado se va a referir al problema de la congelación?

Sr. Hernández Ramírez. — Sí, señor diputado.

Sr. Silveira Márquez. — ¿Para qué quiere saberlo, señor diputado por Buenos Aires, si va a estar en contra?

Sr. González. — Quiero saberlo para hacer el debate, para que cada uno pueda decir con lealtad lo que piensa.

Como el de la congelación es un tema específico dentro del tema general, le pido amablemente al señor diputado por Córdoba que me permita referirme a él, con la anuencia del señor presidente.

Sr. Presidente (Monjardín). — ¿Concede la interrupción, señor diputado por Córdoba?

Sr. Hernández Ramírez. — Con mucho gusto.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. González. — Quiero volver sobre el tema para fijar conceptos con precisión, porque me parece que éste es el instante argentino de la responsabilidad y de la claridad en las posiciones.

Esta discusión que se origina en un párrafo, en el procedimiento de introducción del artículo que a veces se califica de contrabando, como lo hizo el diputado Belnicoff, sin que yo me enojara, y otras veces de injerto clandestino, en una agudeza de lenguaje del señor diputado Perette; esta discusión va al fondo del asunto.

Es necesario dilucidar posiciones. Tenemos un presupuesto de 80.000.000.000 de pesos; una recaudación total de 40.000.000.000; un incremento por aumento de los impuestos aprobados de 4.000.000.000 de pesos y un déficit potencial de 36.000.000.000.

Frente a estas cifras yo digo que la única posibilidad de equilibrio reside en la reducción de los gastos públicos, que, no obstante, no permitirá enjugar el déficit del presupuesto. Necesariamente habrá que recurrir a reducciones en todos los rubros del presupuesto.

Sr. Perette. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. González. — Sí, señor diputado.

Sr. Perette. — Dado el planteo que hace el señor diputado con la sinceridad y vehemencia que le caracterizan, yo le pregunto si tiene conocimiento de cuál será la cantidad de empleados públicos que cesarán en sus funciones.

Sr. González. — No estoy en condiciones de informarle, porque no tengo las cifras. El señor diputado por Entre Ríos sabe que si las tuviera las daría. Ha llegado el instante de la verdad, y el pueblo comprenderá.

Sr. Perette. — Es necesario que el Parlamento estudie y analice para dar las soluciones que correspondan. De la gravedad de todo esto surge la necesidad de una ley que contemple el problema, pero no pretenda la mayoría conseguir por vía discrecional una norma, como tampoco que determinada norma sea la única salida, la única solución para encarar un problema económico de tal gravedad y que tendrá repercusión cuando quede un importante sector sin trabajo.

Sr. González. — De las palabras del señor diputado interpreto que no estaría en contra de las cesantías que podrían producirse, sino en contra de la forma en que ellas se realizarían.

Sr. Perette. — De ninguna manera.

Sr. González. — De modo que el señor diputado está en contra de las cesantías.

Sr. Perette. — He dicho que hay que hacer el análisis a fondo del problema para buscar las soluciones adecuadas...

Sr. González. — El país necesita que hablemos con claridad. No podemos seguir jugando a la demagogia con las palabras.

Sr. Perette. — No pueden venir al Parlamento sorpresivamente presentando una iniciativa que perjudica a un gran sector de la población.

Sr. González. — Si está disconforme con el procedimiento, podríamos discutirlo.

Sr. Perette. — Estoy disconforme con todo, señor diputado.

Sr. González. — El señor diputado está a favor, entonces, de una burocracia gigantesca...

Sr. Perette. — No, señor diputado.

Sr. González. — El señor diputado está con la irresponsabilidad en este instante dramático que vive el país.

Sr. Presidente (Monjardín). — Ruego a los señores diputados no olviden que está en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba, que concedió la interrupción al señor diputado González.

La Presidencia ruega a los señores diputados tengan a bien no dialogar.

Sr. Hernández Ramírez. — Haciendo uso de un pequeño y circunstancial derecho de propiedad, le ruego al señor diputado González que mientras haga uso de la palabra, en la extensión que considere conveniente, conserve el tono y el timbre necesarios para que la fatiga, junto al pesado ambiente que hay en este recinto, no

haga que se exalten nuestros espíritus, y tratemos de buscar con tranquilidad soluciones eficaces que el país espera.

Con la venia de la Presidencia, he concedido una interrupción al señor diputado por Buenos Aires y estoy dispuesto a seguir haciéndolo en todas las ocasiones en que se me solicite.

Sr. Pozzio. — Si me permite el señor diputado...

Sr. González. — Agradezco la atención del señor diputado y le cedo con mucho gusto la palabra al señor diputado Pozzio.

Sr. Presidente (Monjardín). — Para una breve interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pozzio. — El problema económico a que se hace referencia, evidentemente resulta insoluble, porque si se pagara de acuerdo con la antigüedad e índices a establecerse, es indudable que el problema económico no se solucionaría a través de las cesantías.

Sr. González. — El procedimiento establecido crea las condiciones para la paulatina reducción de la burocracia, sin crear un problema insoluble e inmediato en el campo en que las cesantías podrían producirse. Además estimula, como decía el señor diputado Prece, la traslación de grandes sectores que están ahora en la burocracia y que se desplazarán, incluso con ventajas, a los sectores de la producción. De manera que ponemos en marcha un procedimiento que tiende a solucionar el déficit impresionante del presupuesto de gastos públicos de la Nación.

No es, desde luego, una solución inmediata para numerosos funcionarios que están atados, lamentablemente para ellos, porque tienen quince o veinte años de servicios, y que de no ser así, elegirían un camino de mayor rendimiento económico en el campo privado. Ellos acogerán alborozados esta solución económica que les permitirá percibir doble sueldo durante cierto tiempo. Si fueran privados contra su voluntad de sus cargos porque así lo exigieran las necesidades de la administración pública, estarían respaldados durante cierto tiempo para orientarse por nuevas sendas económicas.

Quiere decir esto que en un determinado tiempo de desarrollo, cuando se haya cumplido el plan de reducción de vacantes que se producirán a través de este mecanismo y de la congelación de los cargos, estaríamos tratando de obtener la nivelación del presupuesto, cuyo déficit es, en grandes números, de 35.000.000.000 de pesos.

Sr. Pozzio. — Si el texto del proyecto que se ha leído dijera que ese retiro de la administración se efectúa a solicitud del propio interesado, el planteo sería adecuado. Pero aquí sé dice que queda facultado discrecionalmente el Poder Ejecutivo...

Sr. González. — No dice «discrecionalmente».

Sr. Pozzio. — ...a reducir el personal en la medida o en los términos que él crea convenientes.

te para esa racionalización administrativa. Aquí se impone la cesantía; no es un acto voluntario.

Sr. González. — Así es, señor diputado. Pero nosotros sostenemos teóricamente que se van a dar los dos casos: el de los que se van a ir por su propia voluntad y el lamentable de la gente que tendrá que ser dejada cesante. Nosotros decimos con lealtad que esto se producirá en la menor medida posible, advertidos de que no podemos intentar resolver un problema económico creando un problema social, pero advertidos también de que la República necesita encarrilarse por sendas de realismo económico y tiene que reajustar sus gastos e incrementar sus ingresos, reducir el consumo y ampliar la producción; porque si no hacemos esto, no sólo nosotros los radicales intransigentes sino también ustedes y el país entero iremos inexorablemente a la quiebra definitiva, a la postración sin remedio, si se produce el fracaso, que calificaría de naufragio. Ahora se requiere crear las condiciones de estabilidad económica...

Sr. Perette. — Sin ley de presupuesto el señor diputado pretende entrar a considerar un aspecto de la ley de presupuesto.

Sr. González. — Este es el aspecto fundamental y agudo de la República, como todo el país y el sector de la minoría saben.

Se puede discrepar en cualquier cosa. Exijo la contrapropuesta. Que se diga que por este camino no conviene seguir, y que se ofrezca otro mejor. Que ofrezcan la solución. Lo contrario es levantar discrepancias sonoras esgrimiendo palabras que pueden ser gratas al espíritu transitorio de las multitudes, que son propicias a los espejismos. Nosotros seguimos otro camino. Lo dije y lo reitero: cumpliremos con nuestro deber, y el pueblo comprenderá.

Sr. Presidente (Monjardín). — Estaba en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández Ramírez. — Debo hacer una aclaración a esta Honorable Cámara. Solicité la palabra, pero concedí al señor diputado González una interrupción, con el ánimo...

Sr. González. — Le doy las gracias al señor diputado. Yo entendí que me cedía la palabra, pero no en carácter de interrupción.

Sr. Hernández Ramírez. — ...de que después de hacer uso de ella el señor diputado, iba a continuar yo en el uso de la palabra.

Entendí que el señor diputado iba a defender una situación que interesa a todo el país; más bien dicho, que iba a llamar la atención sobre un aspecto de este plan de economía, que podría influir gravemente sobre la salud del pueblo argentino.

El sector de la minoría, al cual pertenezco, resolvió retirarse del recinto. Dado que debo tener una conducta de disciplina en cuestiones que no afecten a mi conciencia, como miembro de la Unión Cívica Radical del Pueblo, yo me habría retirado, sin aceptar órdenes ni indica-

ciones. Le consta a la Honorable Cámara que he tenido suficiente altivez, entereza y espíritu de rebeldía frente a aquellas situaciones que, según mi interpretación, no debían quedar sometidas a la disciplina política. Algún señor diputado ha hecho una observación en este sentido que, sinceramente, no creo merecer, ni por mis antecedentes ni por mi conducta en este recinto.

Quiero expresar con toda serenidad que, frente a una consulta que hiciera a dos miembros de la mayoría, en forma directa, personal y privada, ajena diríamos al debate de la Cámara, me informé de que era posible una medida de congelación de todos los cargos vacantes y de los que se produjeran posteriormente. Ello tiene el propósito, que me parece muy comprensible, de contribuir a solucionar el tremendo problema de la burocracia que pesa sobre la economía de nuestro país.

Si los veintiséis médicos —creo que ése es el número— que formamos parte de esta Honorable Cámara de Diputados pudiésemos dar nuestra opinión con respecto a la congelación de vacantes, es muy probable que coincidiésemos, sin distinción de sectores de ninguna clase, en que no se puede tomar una medida de esta índole en forma indiscriminada, cuando está de por medio la asistencia de la salud del pueblo. Esto tiene validez no solamente con relación al sector en que he actuado por muchísimos años, de los enfermos nerviosos y mentales, sino en cualquier otro que se halle ligado a la salud pública en su faz preventiva o curativa.

Ya el gobierno de la Revolución Libertadora estableció la congelación de vacantes en forma indiscriminada. La consecuencia fue que en algunos hospitales o establecimientos de asistencia médica del Ministerio de Salud Pública de la Nación se congelaron vacantes de enfermeros, cargos que son de vital importancia para la correcta atención de los enfermos. Voy a dar un ejemplo. En un establecimiento que asiste a 4.500 enfermos, en el cual hay solamente 600 empleados y en el que es necesario hacer cuatro turnos de seis horas para cubrir las veinticuatro horas del día, se congelaron nada menos que casi cien vacantes de enfermeros. Y fue así como pabellones de doscientos enfermos mentales, algunos de ellos con un tipo de excitación casi permanente, quedaron a cargo, en cada turno, de un solo enfermero, quien debía atender a doscientos pacientes.

Doy este ejemplo para que se advierta que no es posible aplicar indiscriminadamente la buena medida de la congelación de vacantes, y que podemos llegar a esta situación, agravada con las nuevas vacantes que se produzcan por jubilación, fallecimiento, renuncia o cesantías que se están produciendo en establecimientos hospitalarios.

Hay servicios hospitalarios que necesitan la asistencia permanente no digo de una enfermera o un enfermero, sino de todo un equipo de enfermeros. Así ocurre en el caso de operados del corazón, del pulmón o del cerebro, a los cuales hay que tomar la tensión arterial, la respiración y la temperatura prácticamente cada quince minutos como mínimo, y mejor sería hacerlo cada diez o cinco minutos si hubiese personal en número suficiente durante los tres, cuatro o cinco días posteriores a la intervención quirúrgica.

Supongamos que en esa clase de establecimientos, en los que hay que realizar esta asistencia especializada en el orden quirúrgico o en cualquier otro orden de la medicina, se aplicase indiscriminadamente este proyecto que tiende a descongestionar la extraordinaria burocracia de la República. ¿Qué ocurriría con nuestros enfermos? Se nos morirían como se nos están muriendo en nuestros hospitales, por falta de enfermeros. No ya como en algunas oportunidades, en lugares hasta de la proximidad de la capital de la República, por falta de medicamentos, sino por falta de asistencia de enfermeros.

Aplicado esto a la situación de necesidad urgente de la República, de amoldar los presupuestos a las posibilidades, implicaría proseguir en la situación angustiosa para el médico de no disponer del número necesario de enfermeros para asistir a los seres humanos que están bajo su responsabilidad, y a los cuales en muchos casos ve morir sin poder hacer nada, frente al empecinado propósito de algunos gobiernos de no querer levantar esa medida ante los reclamos de directores y de médicos, y de las personas que tienen el dolor de ver a miembros de su familia abandonados por falta de asistencia de enfermeros.

Las soluciones que se dan a los establecimientos que necesitan un número mínimo de enfermeros para que sean medianamente atendidos los enfermos, que el Estado tiene obligación de asistir, son reducir ese personal a punto tal que quedan cien vacantes en establecimientos donde hay doscientos alienados a cargo de un solo enfermero; alienados que son buena gente, porque si no pondrían chalecos de fuerza a los médicos, enfermeros y empleados administrativos, y serían ellos los que entrarían a dominar la situación.

Tal es la discordancia y la incapacidad de interpretación de este grave y trágico problema que parece promover sonrisas en diputados ignorantes de la materia, a quienes invito a que se trasladen a los establecimientos para que vean con sus propios ojos que lo que digo aquí es una trágica realidad.

Llegada la hora de decir la verdad a la República, como manifestaba el señor diputado González, resulta vergonzoso que nos visiten personalidades extranjeras, venidas de paí-

ses donde hay un alto grado de asistencia social, que se encuentran con establecimientos en que los enfermos mentales, bacilosos y otros son asistidos por una mínima cantidad de enfermeros.

Traigo el problema con motivo de la información que me dieron los señores diputados Prece y González. No se puede ni debe aplicar, humana y honradamente, el propósito de impedir que se nombre el número suficiente de empleados de esta clase para asistencia de los enfermos, por más leyes que queramos hacer para corregir el mal de la burocracia.

Hay que discriminar de una buena vez. Que se llenen las vacantes de enfermeros que están sin llenar desde gobiernos anteriores a la revolución libertadora. No le hago cargos a este gobierno. El problema viene desde el régimen depuesto, que gracias a Dios ya no existe ni creo que ha de volver a existir por más ilusiones y alucinaciones que tengan algunos argentinos que encuentran que la solución de nuestra desgracia y de nuestra recuperación económica estaría en el retorno de lo que fue denigrante para la República.

No hago cargos. Aprovecho la oportunidad, porque sé que me escucha el país para reclamar que se dé a los enfermos la asistencia que merecen.

Se han votado en una sola sesión miles de millones, como si estuviésemos en el mejor de los mundos, y en otra sesión se nos amenaza con cortar por completo los recursos, incluso a costa de la salud del pueblo argentino.

Seamos coherentes en la solución de nuestros problemas. Tengamos en cuenta que podemos salvar a la República, porque a pesar de todo el pesimismo a que lógicamente nos lleva esta situación, al país no lo fundirá este gobierno, como no lo fundieron los anteriores, por malos que fuesen. La República se salvará a pesar de todo.

Tengamos fe en nuestras riquezas; tengamos fe en nuestra capacidad de trabajo; tengamos fe en el significado semántico del término «trabajar», que ha de coadyuvar a la solución de los problemas del país.

Sr. González. — Hay que estimular el ahorro.

Sr. Hernández Ramírez. — Sí, señor diputado, pero no el ahorro que hace el trabajador humilde al guardar sus pesos en la caja tal o cual al 5 ó 10 por ciento de interés, porque luego viene el gobierno con la dichosa maquinita, que produce cientos de millones de pesos, y reduce su valor en forma cada vez más alarmante. Ahorro, sí; pero con moneda sana que lo respalde.

No es éste un problema fácil de resolver, pero hay que resolverlo con decisión. Hay que terminar de una vez por todas con esta situación anormal, de inflación cada vez mayor, que trae como consecuencia el agio y la carestía de la vida.

Hay que aplicar oportunamente los remedios necesarios para que el pueblo pueda sobrellevar las penurias que soporta en la actualidad.

Estos fueron los sentimientos que me animaron para usar de la palabra en este momento.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Gómez Machado. — El artículo que se proyecta demuestra la rara sensibilidad de un gobierno que aspira a realizar una tarea constructiva en el país. Nos hubiera sido fácil actuar como han actuado otros gobiernos, porque al llegar el 1º de mayo a la Casa Rosada teníamos abiertas las puertas de la administración para dejar cesante a mucha gente. Y hemos demostrado, haciendo algo nuevo en el país, que estábamos en otra función y en otra tarea.

Ningún hombre del sector de la minoría tiene derecho a imputar a este artículo un sentido que no tiene.

Afirmamos, sí, que es el momento de iniciar la política de austeridad en la República. Ya la iniciamos; pero a veces, animados de una preocupación de tipo social que nos llevó a no advertir la situación económica de la República, hemos votado en este mismo recinto leyes que sabíamos que se iban a cumplir con dificultades.

Hace falta que hablemos con crudeza en el Parlamento argentino. Ha estado bien mi amigo González, con quien me solidarizo totalmente en sus expresiones, al decir, descarnadamente al pueblo que hay que hacer política de austeridad en la República; que hay que racionalizar la administración pública como base para un programa de austeridad, a fin de equilibrar un presupuesto que hemos heredado, porque esto viene de lejos. Hemos recibido la herencia tal cual se nos dejó.

Sr. Bernasconi. — ¿El señor diputado me permite una interrupción?

Sr. Gómez Machado. — Sí, señor diputado.

Sr. Bernasconi. — Quiero preguntar al señor presidente del sector de la mayoría si han pensado hacer economías en los gastos de las fuerzas armadas. El otro día me asombré al leer la noticia en los periódicos de que el ministro de Educación auspiciaba en su ministerio un ahorro de mil millones de pesos. Pregunto si en las fuerzas armadas se ha pensado reducir los presupuestos, porque en este país, como en muchos otros, el hilo se corta siempre por la parte más delgada. Las economías también habrá que hacerlas con el hombre de arriba y no con el de abajo, que siempre tiene que darlo todo. Si es necesario realizar economías, conviene comenzar por los hombres de arriba, señores diputados. Entonces sí se podrá hablar de racionalización administrativa y de justicia.

Sr. Presidente (Monjardín). — Continúa en el uso de la palabra al señor diputado por Santa Fe.

Sr. Gómez Machado. — Contesto al señor diputado por la Capital.

El presupuesto de las fuerzas armadas no es abultado. Este país, que ha desarrollado su acción durante muchos años con presupuestos mi-

litares elevados, no ha hecho adquisiciones de material bélico, con excepción del que ya estaba comprometido con anterioridad.

Además, mientras existan las nacionalidades no deben olvidar los señores diputados que las fuerzas armadas serán una expresión constitucional en la defensa de la soberanía. No hay que hacer demagogia en esa forma...

Sr. Bernasconi. — Yo no hago demagogia. He hecho una pregunta.

Sr. Gómez Machado. — ...lanzando una expresión de este tipo, cuando todos sabemos que hemos salido de un proceso revolucionario en que las fuerzas armadas han tenido parte importante, y que ellas han entregado el poder a la civilidad. Nosotros, sin embargo, no hemos aumentado un solo peso en el presupuesto de las fuerzas armadas.

A propósito de los malos hábitos de este país, quiero manifestar al señor diputado que en otras oportunidades, cuando se dictaba el estado de sitio, inmediatamente se extendía el decreto correspondiente —de acuerdo con la ley militar— para que a los integrantes de las fuerzas armadas se les computara doble el sueldo y la antigüedad para el ascenso. Ahora esto no se ha hecho, ni se hará tampoco, con motivo del estado de sitio sancionado por este Parlamento. No se ha hecho porque el gobierno tiene conciencia de su responsabilidad y porque las fuerzas armadas también la tienen.

Por eso no corresponde manifestar que el hilo se corta por lo más delgado. Solamente se trata de adoptar algunas medidas...

Sr. Perette. — Con cesantías de empleados públicos.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Domingorena. — ¿Qué hicieron ustedes en Entre Ríos?

Sr. Gómez Machado. — El señor diputado por Entre Ríos sabe que en el país este gobierno no ha dictado cesantías.

Sr. Silveira Márquez. — Pero se pueden hacer.

Sr. Gómez Machado. — La afirmación del señor diputado por Entre Ríos es intencionada. La conducta demostrada en ocho meses de gobierno indica que los hombres designados por la revolución no han sido excluidos de la administración pública.

Nadie nos puede negar el derecho de racionalizar la administración pública. Si los señores diputados no entienden que este problema de la burocracia es grave, significa que no lo quieren entender. Ha llegado el momento, no de hacer política electoral, sino de iniciar un proceso que nos lleve a sanear nuestra moneda. Esta es una de las medidas adoptadas. No hay cesantías, señor diputado por Entre Ríos. Su afirmación es intencionada.

Sr. Perette. — ¿Y este artículo para qué se sanciona?

Sr. Gómez Machado. — Para ubicar a la gente en su lugar. Además, sienta el precedente de que quien se retira de la administración pública tendrá el beneficio social de la indemnización por despido, que también es una garantía social.

¿Qué va a pasar en el país? A través de este proceso de desarrollo, que nosotros estamos ansiosos de crear y estamos creando, aunque a algunos no les guste esta expresión...

Sr. Bernasconi. — Permítame contestarle.

Sr. Gómez Machado. — Ya le he concedido al señor diputado Bernasconi una interrupción. Lo que pasa es que cuando al señor diputado Bernasconi se le concede una interrupción, hace un discurso, y para discursos, por ahora basta el mío.

En este proceso, señor presidente, se van a crear grandes fuentes de trabajo en el país. A nadie más que al gobierno le interesa que no haya desocupación, y aseguramos que no la habrá, porque todo este proceso nos dice a nosotros que a un año vista habrá grandes fuentes de trabajo en el país, habrá mejores salarios que los actuales, y habrá entonces, en una economía saneada, garantías sociales que se puedan pagar.

Esta no es más que una medida para sanear el presupuesto. De ninguna manera puede atribuírsele un sentido de cesantías en masa, que no lo tiene; ni tienen derecho los señores diputados a interpretarlo así, porque hemos demostrado que cuando no necesitábamos venir a decir esto al Congreso, pudimos declarar cesante a mucha gente y no lo hicimos.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monjardín). — Ruego a los señores diputados que no interrumpen al orador que está en el uso de la palabra.

Continúa el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Gómez Machado. — El señor diputado por Córdoba se ha referido a una circunstancia especial, a los establecimientos de sanidad. Lo que pasa es que los establecimientos privados de sanidad están pagando mejores salarios que los que percibe la enfermera común del establecimiento público. Esa mano de obra es absorbida directamente por las entidades privadas, y entonces nadie quiere ir a trabajar a la administración pública.

Sr. Hernández Ramírez. — Está equivocado, señor diputado.

Sr. Gómez Machado. — Y yo aspiro a que alguna vez ocurra así en este país, como ocurre en ese rubro a que se refiere el señor diputado. Aspiro a que haya tanta demanda de mano de obra y tan bien pagada que nadie quiera ser más empleado público, porque está mejor y más seguro en la actividad privada. Esa es una aspiración que no significa en manera alguna que se pueda hablar de cesantías.

Sr. Hernández Ramírez. — ¿Considera el señor diputado que me ha guiado un móvil político al presentar este problema?

Sr. Gómez Machado. — Por estos conceptos y reiterando mi total y absoluta solidaridad con las expresiones vertidas por el señor diputado González, yo me pronuncio afirmativamente por este artículo.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Bernasconi. — Quería decirle al señor diputado Gómez Machado que quien ha hecho demagogia ha sido él.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tenga la bondad el señor diputado de no provocar diálogos.

Sr. Bernasconi. — Señor presidente: yo he tenido la valentía de decir dónde se puede recurrir para hacer una verdadera economía, y el que ha hecho demagogia es el señor diputado Gómez Machado.

Sr. Domingorena. — No lo acompañan en esa aventura los compañeros de bancada. Presente un proyecto en ese sentido, a ver cuántas firmas consigue.

Sr. Bernasconi. — No pretenda complicarme con mis compañeros de bancada; no lo va a conseguir.

El señor diputado se olvida de que cuando este diputado habla asume la responsabilidad, doctor Domingorena; yo no necesito que usted me diga si mi bancada está o no de acuerdo conmigo. Yo asumo la responsabilidad de todo cuanto digo.

Sr. Domingorena. — Usted no está actuando como anarquista sino como representante del radicalismo del pueblo.

Sr. Bernasconi. — El que ha hecho demagogia ha sido el presidente de ese bloque, que no ha dicho la verdad. Lo que yo he manifestado lo he dicho sin hacer demagogia de ninguna clase, y así lo va a entender alguna vez el pueblo de la República. Y en cuanto a la honra que me merecen las fuerzas armadas, nunca la he puesto en tela de juicio. Todo tiene un límite, y si se obliga al de abajo a apretarse el cinturón, también debe procederse en la misma forma con el de arriba.

Sr. González. — Así se hará, señor diputado.

Sr. Bernasconi. — Eso es justicia; no anarquía, señor diputado Domingorena. No aventure juicios inocuos.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Marini. — He escuchado en silencio el discurso del señor presidente del bloque de la mayoría y me he formulado serenamente este juicio: su discurso abre la perspectiva para ver lo que va de la ilusión a la realidad. Las concreciones del desarrollo económico están por verse. Pero la realidad de hoy nos muestra el

panorama de la cesantía de una gran cantidad de servidores de la administración pública.

Nosotros entendemos que este asunto no puede tratarse de esta manera. Hay que considerarlo cuando se analice el presupuesto general de gastos de la Nación. En esa oportunidad, con plena conciencia de nuestra responsabilidad, veremos dónde hay que cortar, qué gastos deben ser reducidos para lograr el equilibrio de las erogaciones y de los recursos, y suprimir el déficit presupuestario.

Lo que me alarma es contemplar la perspectiva general que ofrece el país, porque este episodio no puede tomarse aisladamente. Son muchos los episodios que vamos avizorando y que se vinculan con las gestiones que la Argentina está efectuando, por intermedio del ministro de Economía, ante el Fondo Monetario Internacional.

¿Qué decía un hombre a quien acaso no le reconozcamos autoridad, el doctor Prebisch, cuando analizaba lo que significa el Fondo Monetario Internacional? Que no valía la pena vender la soberanía de un pueblo por un miserable plato de lentejas. A eso equivale ir a buscar los setenta y cinco millones de dólares, para que nos impongan condiciones que significarán la condena de esa industria argentina que ustedes dicen defender. Cerrarán las fábricas, establecimientos industriales, y habrá desocupación. Todo para servir al gran capital de países superindustrializados que quieren colocarnos en situación precaria.

Sr. González. — ¿Cree el señor diputado que el hecho de que Argentina haya solicitado el retiro del resto de su cuota en el Fondo Monetario Internacional, equivalente a setenta y cinco millones de dólares, traduce una voluntad de sometimiento del país?

Sr. Marini. — El simple hecho de retirar los 75 millones de dólares no significa, de ninguna manera, la entrega de la soberanía nacional. Lo grave son las condiciones que se impongan a través de las exigencias de la junta de gobierno del Fondo Monetario Internacional. Y las consecuencias de esto las vamos a contemplar y experimentar muy pronto.

Si las cosas que yo presumo no ocurren, no tendré ningún inconveniente en rectificarme. Pero cuando aparezcan reglamentadas las listas de las importaciones; cuando los impuestos tendientes a proteger a las industrias nacionales sean elevados de tal manera que nuestros productos se coloquen en situación desventajosa frente a los que se puedan importar del extranjero...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monjardín). — Sirvanse no interrumpir los señores diputados.

Sr. Marini. — ...entonces tendré pleno derecho a decir que las normas que gobiernan la economía nacional no se dictan en la Casa Rosada, sino en el Fondo Monetario Internacional.

Sr. González. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Marini. — Sí, señor diputado.

Sr. González. — Quiero señalar, en primer término, que la adhesión al Fondo Monetario Internacional no fue dispuesta por este gobierno, sino por el de la Revolución Libertadora, que suscita los más cálidos elogios del señor diputado Marini. Además, cuando se firmó la adhesión se conocían las condiciones vigentes e imperantes para todos los países que ingresaran al fondo. El gobierno de aquel entonces, que provoca el elogio del señor diputado y de toda esa bancada, decidió aceptar las condiciones que ahora se quieren enjuiciar.

Además, la Revolución Libertadora realizó la otra etapa de la gestión cuando retiró la mitad de la cuota, por un valor de 75 millones de dólares, para enjugar el déficit de la balanza de pagos de aquella época.

Sr. Marini. — Los hombres de la Revolución Libertadora de septiembre de 1955 fueron quienes adhirieron al Fondo Monetario Internacional, pero la adhesión no obliga indefinidamente, porque puede ser denunciada en cualquier momento.

Sr. González. — Está el principio de la continuidad jurídica de la Nación, que se debe respetar.

Sr. Marini. — Yo podría decirle al señor diputado González cuáles fueron los episodios que giraban en torno a aquella adhesión e, inclusive, cuál era el pensamiento del actual presidente de la República.

La adhesión carecía de una obligatoriedad llevada al extremo. El gobierno que sucediera al de la revolución se podía retirar del Fondo. Es muy cómoda la situación en que se colocan los que, sin haber hecho la adhesión, tratan de gozar de los probables beneficios que esa adhesión puede significar.

Sr. González. — ¿No dice el señor diputado que la adhesión provoca perjuicios?

Sr. Marini. — Frente a la situación creada en torno a la adhesión, quedaba el recurso del gesto soberano de denunciar ese acto.

Aquí hay que señalar la diferencia entre la actitud de los titulares del gobierno de la revolución, en cuanto a lo que pudiera significar un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, y la actitud que está adoptando el gobierno actual de la República frente a esos mismos compromisos. El ministro de Economía está en Norteamérica gestionando desesperadamente esos créditos que se enuncian todos los días pero que no llegan nunca, y entre tanto ofrece soluciones de toda naturaleza, que abarcan la promesa de

restablecer el equilibrio financiero del país, lo que se ha de lograr con la cesantía de los empleados públicos, con las necesidades de esos sectores que recibieron de ustedes la solemne promesa, durante la campaña electoral, de estabilidad para el agente público.

No está en juego aquí un problema simple o abstracto. Está en juego lo que ustedes llamaron el programa de felicidad para veinte millones de argentinos. Con esa promesa...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. González. — Una política distinta significaría la ruina económica, el desequilibrio continuado...

Sr. Presidente (Monjardín). — No interrumpen los señores diputados al orador.

Sr. Marini. — Por el camino que este gobierno ha elegido no hay posibilidades de emancipación, ni de desarrollo económico. Puede haber buenos negocios económicos para los inversores; puede haber buenos negocios para los capitales extranjeros. Pero el país ha de ver su industria resentida.

Yo no esperaba esto del actual gobierno del país. Es más, creo que este debate teníamos que hacerlo cuando se tratara el presupuesto general.

Ante el artículo que se ha propuesto, nosotros no podemos contribuir con nuestro voto a que se decrete la cesantía de millares de servidores públicos. Por ello, ratificando las palabras del señor diputado Perette, reitero que este bloque no va a contribuir a mantener el quórum de la Honorable Cámara.

Sr. Gómez Machado. — En realidad los señores diputados adelantan en unos minutos la huída que tenían programada para cuando se tratara el problema ANSEC.

Sr. Marini. — No es una huída; es un acto de responsabilidad.

Sr. Gómez Machado. — Es la responsabilidad de los que huyen.

Sr. Marini. — No le vamos a aceptar al señor diputado sus calificaciones.

Sr. Gómez Machado. — Los señores diputados tienen que permanecer en el recinto y votar.

—Se retiran del recinto los señores diputados del sector de la minoría.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a llamar para votar.

Sr. Carrera. — ¿Hay número en la casa y en el recinto, señor presidente?

Sr. Presidente (Monjardín). — En la casa hay 111 señores diputados; en el recinto hay 78 señores diputados.

Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Oreja. — Me permito sugerir a la Presidencia, si es que ya no ha adoptado las medidas del caso, la necesidad de que se remitan al

Honorable Senado las sanciones formalizadas en el día de hoy, a efectos de que puedan ser consideradas por ese cuerpo.

Sr. Presidente (Monjardín). — La Presidencia informa que, siguiendo una práctica habitual, a medida que la Honorable Cámara ha ido sancionando los proyectos de ley, ha procedido a cursar las comunicaciones correspondientes al Honorable Senado.

Al mismo tiempo, la Presidencia lleva al conocimiento de los señores diputados que hace unos instantes se ha recibido la siguiente comunicación del Honorable Senado: «Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que, de acuerdo al artículo 57 de la Constitución Nacional, el Honorable Senado, en su reunión de la fecha, ha resuelto no celebrar sesión hasta el día 12 de enero próximo.» Se continuará llamando para votar.

—Se continúa llamando.

Sr. Gómez Machado. — ¿Cuántos diputados hay en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Monjardín). — En el recinto hay 76 señores diputados, y en la casa 106 señores diputados.

Sr. Gómez Machado. — Hago indicación de que se continúe llamando, señor presidente.

Sr. Presidente (Monjardín). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

—Se continúa llamando.

—Luego de unos momentos:

Sr. Gómez Machado. — Señor presidente: advertidos de que el retiro de los diputados de la bancada minoritaria se ha realizado con la intención de romper el quórum, y que aún se encuentran en la casa, nos quedarían dos caminos: primero, solicitar, si no huyen rápidamente, que se les compela por la fuerza pública...

Sr. Rodríguez Araya. — Ya se han ido, señor diputado.

Sr. Gómez Machado. — Queda un solo camino: hacer responsable a la bancada de la minoría, que obstruyó el trabajo de la Cámara, y pedir que se levante la sesión.

Sr. Liccaga. — Voy a solicitar que se continúe llamando, señor presidente.

Sr. Presidente (Monjardín). — Es previa la moción formulada por el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Gómez Machado. — Retiro mi moción, señor presidente.

Sr. Rodríguez Araya. — Hago mía la moción de mi comprovinciano: que se levante la sesión.

Sr. Presidente (Monjardín). — Corresponde votar la moción del señor diputado por Santa Fe. No habiendo número, queda levantada la sesión.

—Es la hora 0 y 45 del día 23.